Constitución Pontificia de Inocencio IV dada a la Iglesia de Salamanca el año 1.245. Estudio histórico - diplomático

Angel Riesco Terrero

SUMARIO:

Introducción. — Ambientación histórica. — Normatividad textual. — Descripción paleográfica. — Trans-

misión textual y análisis diplomático. — Transcripción de la Constitución de Inocencio IV. — Traducción de la misma.

INTRODUCCIÓN.

La presente monografía, tiene como objetivo dar a conocer el rico e interesante contenido histórico-documental de un instrumento jurídico medieval, cuyo texto se conserva en el archivo Vaticano: Reg. Vat. vol. 21, ff. 184v-186v., y en el archivo catedralicio de Salamanca con la signatura: caja 15, leg. 2 n. 51. Del citado diploma existen numerosas copias: notariales y simples de los siglos XIV-XVIII. Todas ellas dependen directamente del ejemplar pontificio conservado en Salamanca¹.

Dicho documento, rico en contenido e interesante por la forma de expedición, adquiere solemnidad y carácter público al ser validado y reexpedido por el Papa Inocencio IV (Lyon, 7 mayo, 1245) cuando éste se hallaba ya en Lyon dando los últimos toques al programa de reforma que, en breve, presentaría a los prelados reunidos para celebrar el XIII^o Concilio ecuménico (Conc. I de Lyon).

Se trata de una constitución pontificia, a modo de ordenamiento jurídico, nacida —más por iniciativa papal que a instancias de la iglesia salmantina— para regular la provisión de beneficios y corregir, mediante eficaces normas reguladoras, los abusos introducidos a lo largo del tiempo en la aplicación del derecho, en el culto público y en la propia vida y costumbres del clero y pueblo de Salamanca. La presente constitución y normas en ella contenidas forma, pues, parte del programa general de reforma de la Iglesia universal propuesto e iniciado a raíz de los concilios lateranenses III (a. 1178) y IV (a. 1215) y llevado a cabo —aunque sólo fuera en parte— gracias a la decidida voluntad e intervención directa de la Santa Sede. De ahí que este documento, sin ser fuente única, pueda considerarse, desde el punto de vista histórico-jurídico, como medio valiosísimo para conocer, de una parte, la situación religiosa, económica y social del clero, la vida y problemas de toda índole de una iglesia par-

1. Salamanca, Archivo Catedral, cajón 7, legajo 3, nn. 28 y 28 bis; caj. 14, leg. 2, n. 15; caj. 15, leg. 1, n. 47, ff. 1-5 y leg. 2, n. 6; caj. 16, leg. 1, n. 28, ff. 31-36.

ricular de España a mediados del s. XIII y, de otra, el pensamiento y actividad de la Iglesia Romana en la persona de su representante legítimo, el Papa Inocencio IV.

Es cierto, que la citada constitución, como las otorgadas a otros cabildos catedrales españoles durante el s. XIII, peca de confusa tanto por razón del destinatario como por la amplitud de sus objetivos. Aparte del Obispo, Deán y Cabildo, que aparecen como destinatarios principales de la constitución, subyacen en ésta —en segundo y tercer plano— otras dos entidades a las que con frecuencia se alude en la normativa textual: el *cuerpo benefical catedralicio*, sin duda el más representativo y prestigioso de la diócesis salmantina en el siglo XIII por estar vinculado a la iglesia matriz (catedral) y el resto del *clero diocesano*: parroquial y benefical, que ejercía el ministerio en iglesias parroquiales, capellanías, santuarios, capillas, etc. dentro y fuera de la ciudad.

Todos ellos, por razón del oficio pastoral, aunque económicamente no recibieran subvención directa del patrimonio común correspondiente a la iglesia diocesana, estaban sometidos a la jurisdicción eclesiástica y control del Obispo y de sus legítimos representantes: los Arcedianos. Con relación a su contenido, la constitución trata de imponer un conjunto de normas conciliares de tipo disciplinar, jurídico-administrativo y pastoral comunes a todos los cabildos y clero, encaminadas a suplantar los estatutos y costumbres particulares, contrarias —muchas veces— al derecho general y causa fundamental del malestar, desorden, indisciplina y corruptelas del clero diocesano.

Permanece, sin embargo, bastante oscuro el aspecto económico-administrativo al no detallarse la procedencia de los fondos patrimoniales y quedar en absoluta penumbra, tanto la forma de dis-

tribución como el equivalente de un conjunto de subvenciones, recursos y rentas suplementarias que, al no ser fijas, quedan a la discreción del Obispo y supeditadas a la situación económica del patrimonio y erario diocesanos. Desde el momento en que un canónigo o beneficiado, por razón de su oficio y cargas anejas, recibe unos emolumentos fijos, proporcionales a su grado y al número de prebendas (beneficios), que posee, y otros totalmente eventuales v. gr. repartos por asistencia a coro y subvenciones (asignaciones) complementarias —llamadas «praestimonia»— procedentes de donativos o de fondos eventuales, cuya administración y distribución correspondía al Obispo, nos movemos —dentro del campo administrativo— en un terreno inseguro y demasiado movedizo para llegar a conclusiones firmes y seguras en lo relativo a estadísticas, porcentajes y niveles socio-económicos.

Otro punto bastante vulnerable de la constitución y, tal vez, el más dificultoso, es el tenor y fórmulas jurídicas estereotipadas que se emplean y que responden a un patrón o modelo general que Roma, a través de sus juristas, aplica, por igual o con ligeras diferencias, a todos los Cabildos y clero diocesano, sin bajar —salvo en casos muy aislados— al detalle y a la situación concreta de cada diócesis.

La génesis de esta disposición gubernativa hay que atribuirle directamente a Inocencio IV que actúa, como Vicario de Cristo y primado de todas las iglesias locales, valiéndose de sus órganos oficiales de administración y gobierno (Curia y Cancillería pontificias). La confección y ejecución de dicha acta documental —fecha en Lyon el 22 de abril de 1245— se debe, en cambio, al jurista español, Cardenal Gil (Egidius) Torres, titular de San Cosme y San Damián².

2. Datos personales sobre el cardenal Gil Torres y su influencia en la curia romana, provisión de beneficios, etc., pueden verse en C. EUBEL, *Hierarchia catholica medii aevi*, t. I, Monasterii 1913, p. 5; D. MANSILLA REOYO, *Iglesia*

castellano-leonesa y Curia Romana en los tiempos del Rey San Fernando, Madrid 1945, pp. 123, 179, 181, 196, 225-28, 231-36, 240, 251, 322, 340, 344-45, 358; idem, *La documentación pontificia de Inocencio III (965-1216)*, Ro-

Aparte del valor histórico —a que acabamos de aludir— con mil referencias e indicaciones sobre instituciones, cargos, personas, nivel económico, costumbres, jurisdicciones especiales, etc., el documento presenta también aspectos de tipo social, jurídico, lingüístico..., no menos importantes, cuyo estudio completo sobrepasa con creces los límites de este trabajo.

Por el momento y sólo en forma tangencial diremos algo sobre facetas tan relevantes como la social, económico-administrativa, jurídica y filológica. Nos fijaremos, en cambio, mucho más en su contenido histórico-documental, poniendo de relieve las principales peculiaridades y detalles de carácter paleográfico y diplomático que aparecen en él, máxime, cuando por razones de su rareza o excepcionalidad pueden servir de normas orientadoras para llevar a cabo la sana crítica documental y fijar con rigor científico la autenticidad diplomática y, en consecuencia, su valor histórico.

Aunque el texto de la citada constitución ha sido publicado en forma abreviada (regesto) por E. BERGER³ y en su integridad por el Dr. Mansilla Reoyo⁴, conforme al original del Registro Vaticano

(Reg. Vat., vol. 21, ff. 184v.-186v.) sin embargo, tales publicaciones resultan imperfectas y algunos de sus pasajes, prácticamente incomprensibles, no tanto por la puntuación adoptada y frecuentes incorrecciones, cuanto por la categoría diplomática de la fuente vaticana que —a juicio nuestro— no pasa de copia, inserta en el registro oficial con alguna posterioridad⁵.

Finalmente, como complemento de este estudio y observaciones de carácter, fundamentalmente, histórico y diplomático, ofrecemos la transcripción paleográfica del diploma conservado en Salamanca y las variantes (en nota) del texto vaticano, para concluir con la traducción española correspondiente.

El contacto directo con el texto original, aquí transcrito y su traducción, tal vez pueda suscitar especial interés e inquietud en otros investigadores y eruditos de la cultura y de las ciencias históricas. Esperamos que, en lo sucesivo, nuevas aportaciones y estudios de todo tipo vengán a completar, ilustrar y, si fuera preciso, corregir, cuanto aquí decimos. Ningún esfuerzo puede calificarse de

ma 1965, pp. 113, 131, 133, 158-59, 172, 189, 213, 365, 422, 424; L. SERRANO, *El Obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el s. V al XIII*, Madrid 1936, III, p. 391; P. LINEHAN, *La Iglesia española y el papado en el s. XIII*, Salamanca 1975, pp. 236-263; J. GONZÁLEZ, *La Extremadura castellana al mediar el s. XIII*, «Hispania» t. 34 (1974) 265-324; tirada aparte, pp. 130-60.

3. E. BERGER, *Les registres d' Innocent, IV* (4 vols.), vol. I, París 1881, reg. n. 1.262.

4. D. MANSILLA REYOY, *Iglesia castellano-leonesa...*, Apéndice 56, pp. 321-330.

5. En los últimos tiempos se ha estudiado —con mayor o menor profundidad— la historia de la institución capitular, su organización, privilegios, poderío económico, controversias jurisdiccionales..., y, más concretamente, la historia de algunos cabildos españoles. Como más representativos, baste citar los estudios de D. MANSILLA REYOY, *Iglesia castellano-leonesa y Curia Romana en los tiempos del Rey San Fernando*, pp. 123-247; E. DURO PEÑA, *Las antiguas dignidades de la Catedral de Orense*, «Anuario de

Est. Medievales» 1 (1964) 289-332; J. GONZÁLEZ, *La clerecía de Salamanca durante la Edad Media*, «Hispania» 3 (1943) 409; J. ALVAREZ VILLAR-A. RIESCO TERRERO, *La iglesia románica y la real clerecía de San Marcos de Salamanca*, Salamanca 1969; J. R. LÓPEZ ARÉVALO, *Un Cabildo Catedral de la Vieja Castilla: Avila, su estructura jurídica* (s. XIII-XX), Madrid 1966; T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, *El Cabildo Catedral de León*, Estudio histórico-jurídico, siglos XII-XIX, León 1974; J. SAN MARTÍN PAYO, *El Cabildo de Palencia*, Pub. del Inst. «Tello Téllez de Meneses» 34 (1974) 229-248; J. GIL SANJUÁN, *Los cabildos catedrales de Castilla ante la reforma tridentina* (Tesis doc. inédita, Madrid U. Complutense, 3 vols. a. 1972 y Extracto de la misma, Madrid 1973, 32 pp.); A. JORGE PÉREZ, *Estudios y constituciones del Cabildo Salmantino en los siglos XIII, XIV y XV* (Memoria inédita de licenciatura), Universidad de Salamanca, 1974.

Sobre distintos aspectos y situación de la iglesia en Castilla durante el s. XIII con abundante bibliografía puede consultarse la obra a.c. de Peter LINEHAN en los capítulos 6-9, pp. 91-183.

inútil si, en definitiva, nos lleva al conocimiento de la verdad⁶.

AMBIENTACIÓN HISTÓRICA.

La constitución del Cardenal español, Gil Torres hecha por comisión pontificia y aprobada personalmente por Inocencio IV, representa —desde el punto de vista legal y administrativo— una forma especial de intervención de la Iglesia de Roma en la vida y gobierno de las iglesias particulares.

Dicha intervención pudo surgir, bien, a petición de la parte afectada, es decir, de la iglesia salmantina, bien, por iniciativa de la autoridad pontificia cuando para llevar a cabo los planes de reforma general de la Iglesia se hacía necesaria la imposición de nuevas formas jurídicas, litúrgicas, disciplinares, etc.

A juzgar por los cánones disciplinarios dictados en el 1.^{er} concilio provincial compostelano, reunido en Salamanca a. 1192 para discutir el problema de la validez del matrimonio de Alfonso IX con su prima D.^a Teresa, infanta de Portugal y, sobre todo, a través de los documentos reales, bulas ponti-

6. Lamento tener que citar aquí, en sentido negativo, un trabajo reciente sobre el Cabildo catedral salmantino (siglo XII-XIII), basado principalmente en la constitución pontificia de Inocencio IV (a. 1245) y que, a pesar de ser un estudio superficial, inconexo y de escaso rigor científico, ha sido galardonado con el «Premio Salamanca» y publicado con el asentimiento del C.S.I.C. (Patronato «J. M.^a CUADRADO») por el «Centro de Estudios Salmantinos». Se trata de la obra de J. L. MARTÍN MARTÍN, *El Cabildo de la Catedral de Salamanca* (Siglos XII-XIII), Salamanca 1975, en la que su autor aprovecha multitud de datos sueltos, contenidos en el *Catálogo de documentos del archivo catedralicio de Salamanca* (siglos XII-XV) del Dr. F. MARCOS RODRÍGUEZ y en otras publicaciones relativas a Salamanca (M. VILLAR y MACÍAS, B. DORADO, J. M.^a CUADRADO, V. BELTRÁN DE HEREDIA, M. GÓMEZ MORENO...) o en la historia de los cabildos eclesiásticos y catedralicios de España (J. GONZÁLEZ, D. MANSILLA REYO, J. R. LÓPEZ-ARÉVALO, J. SAN MARTÍN, T. VILLACORTA, E. DURO PEÑA, J. GIL SANJUÁN, P. LINEHAN...) y sin profundizar en el contexto ni analizar —desde los distintos puntos de vista exigidos por la sana crítica— los múltiples problemas de toda índole que presenta la temática estudiada, llega a conclusiones históri-

ficias, actas episcopales y escritos privados de los siglos XII y XIII, conservados en los archivos salmantinos más antiguos⁷, la vida y conducta de algunos de sus obispos y, más frecuentemente, de ciertos eclesiásticos y seglares pertenecientes al Cabildo Catedral, a la nobleza y al clero benefical y parroquial, no eran demasiado ejemplares.

Las frecuentes intervenciones reales, pontificias y episcopales en desórdenes públicos acaecidos en la diócesis de Salamanca durante la segunda mitad del s. XII y primera del XIII, hacen referencia a robos sacrílegos, muertes violentas de eclesiásticos, corrupción de vida y costumbres, conculcación y desprecio del derecho, escándalos, alborotos, etc. cometidos en forma individual o colectiva tanto por seglares agrupados o pertenecientes a la alta nobleza como por canónigos y beneficiados vinculados al Cabildo catedral o a las distintas clerecías urbanas y rurales existentes en el área jurisdiccional de aquel obispado.

Sin embargo, tales intervenciones son poco frecuentes y siempre en casos de verdadera excepción que confirman la regla general⁸.

cas, socio-económicas, culturales, etc., unas veces, preconcebidas y, las más, pintorescas y contradictorias.

Hace sólo unos meses, J. L. MARTÍN MARTÍN y LI. M. VILLAR, publicaron —en *Documentos de los Archivos catedralicio y diocesano de Salamanca. Siglos XII-XIII*, U. de Salamanca 1977, doc. 217, pp. 303-310— los diplomas catedralicios correspondientes al s. XIII, entre los cuales figura la constitución egidiana de 1245. He omitido ex profeso la correspondiente cita bibliográfica por considerar que el texto latino ofrecido, desde el punto de vista paleográfico-diplomático, es muy inferior al propuesto por E. Berger, D. Mansilla Royo y V. Beltrán de Heredia. Son tantas las inexactitudes y errores paleográficos cometidos en la transcripción y tan confusa y caprichosa la puntuación adoptada, separación de períodos, párrafos, etc., que el texto constitucional así reproducido apenas aporta nada al campo de la investigación, resultando, en unos casos, desvirtuado y, en otros, ininteligible.

7. Archivo Catedralicio, Arch. Diocesano, Sec. Episcopal, Arch. Real Clerecía de San Marcos, Arch. de la Biblioteca Universitaria, y Arch. Conv. de Santa Clara.

8. Salamanca, Arch. Cat., Caj. 23, nn. 32, 36, 39, 45, 48, 49, 62, 67.

El clero —alto y bajo— de la diócesis de Salamanca (s. XIII) hijo de una época concreta y de unas circunstancias históricas, sociales, culturales, religiosas y políticas peculiares, no pudo evadirse —como el resto de los distintos componentes de aquella sociedad— del ambiente y mentalidad reinantes. Enjuiciarlo —como sucede tantas veces— sin conocimiento suficiente y con criterios actuales sería, cuando menos, inexacto y, en la mayoría de los casos, supondría contorsionar el texto y caer en la aberración histórica⁹.

La relajación y poco espíritu religioso —por falta de vocación o de ejemplaridad y entrega— que se atribuye al clero medieval y, especialmente, a los cabildos catedrales— es una acusación que, por demasiado amplia, peca de genérica.

El «episcopologio salmantino» del s. XIII ofrece una lista de diez prelados¹⁰ casi todos prestigiosos y, en general, de gran fama y virtud. Algo parecido ocurría con las dignidades y miembros del Cabildo, aunque entre éstos y, mucho más, entre el clero benefical y rural, no faltaron casos aislados de clérigos sin fe, que con menosprecio de toda ley, llevaban vida tan aseglarada y cometían tales atropellos y violencias, que ni el pueblo más inculto y bárbaro pudo tolerar.

Por lo que se refiere a Salamanca, creo que no se puede hablar de disolución de vida y corrupción de costumbres del clero y pueblo hasta bien entrado el s. XIV y, sobre todo, en el siguiente, cuando la diócesis comienza a ser gobernada por preladados mundanizados e irresidentes, a los que fácilmente secundaban los capitulares —prácticamente exentos y sin ningún control— y el bajo clero, cada vez más ignorante e indigno.

En el momento en que Inocencio IV dicta estas ordenanzas para el clero catedral y parroquial del

obispado de Salamanca, el cuerpo capitular —aparte de ser la institución eclesiástica más representativa y de mayor solidez económico-jurídica— estaba acostumbrado a asesorar a los preladados, a gobernar la diócesis durante los llamados «períodos de sede vacante», a elegir nuevo obispo cuando se producía la vacante por muerte o renuncia del mismo. El voto y observaciones del Cabildo catedral pesaban ante el rey, ante cualquier cabildo catedralicio o colegial, ante la Curia romana y ante cualquier concejo e institución medieval.

A estas prerrogativas, comunes a la mayoría de los cabildos, hay que añadir una nueva y peculiar de los capitulares de Salamanca.

Hasta ahora —a decir verdad— no se ha conseguido descubrir los orígenes y fundamentación jurídica de este excepcional privilegio jurisdiccional, que suponemos vinculado al derecho fundacional de la sede de Salamanca o, tal vez, proveniente de la generosidad de la Curia papal en agradecimiento a los numerosos y buenos servicios prestados por el Cabildo.

Lo cierto es que el Cabildo catedral de Salamanca, desde tiempo inmemorial y aun durante los períodos de «sede plena», venía gobernando con jurisdicción ordinaria y privativa, cual obispo residencial propio, un amplio territorio diocesano, ubicado en el valle de río Huebra denominado «La Valdobra» del que llegaron a formar parte más de 40 beneficios entre parroquias, anejos y capellanías.

A diferencia de los arcedianatos autónomos (exentos) de Briviesca, Calatayud, Tarazona..., regidos por un Arcediano, el territorio de la Valdobra, con un radio territorial y jurisdiccional mucho más amplio que los precedentes, dependía directamente del Deán y Cabildo catedral de Salamanca¹¹.

El espíritu de cuerpo cerrado e independiente

9. Véase nota 6.

10. J. A. VICENTE BAJO, *Episcopologio salmantino desde la antigüedad hasta nuestros días*, Salamanca 1901, pp. 44-58.

11. A. RIESCO TERRERO, *El cartulario del Cabildo ca-*

tedral de Salamanca, «Homenaje a D. A. Millares Carlo», t. II, Madrid 1975, pp. 655-56; F. MARCOS RODRÍGUEZ, *Catálogo de documentos del archivo catedralicio de Salamanca*, Salamanca 1962, pp. 2-3.

obligaba a sus miembros a salvaguardar, con excesivo celo y aun contra derecho, los numerosos privilegios e inmunidades que garantizaban su posición y estamento singular. De ahí que, con visión excesivamente gremial y por sistema, resistieran a cualquier control e innovación (civil o eclesiástico), aunque tales medidas fuesen razonables o encaminadas al bien general del clero y pueblo.

A raíz de la división del patrimonio eclesiástico y de la consiguiente separación de los bienes eclesiásticos del Obispo («*mensa episcopalis*») y del Cabildo catedral («*mensa capitularis*») —gestada entre los siglos IX-XII— se produce una profunda transformación en el clero benefical y parroquial.

Mientras el Cabildo catedral busca el modo de independizarse del Obispo —constituyéndose en persona moral y jurídica prácticamente exenta— el clero benefical (no catedralicio) y parroquial se agrupa en forma gremial y defensiva en las célebres «clerecías» de tipo urbano y rural. El cuerpo de canónigos y beneficiados del Cabildo catedral salmantino (—por ser el más fuerte)— trata de atar y, en cierto modo, de restringir y controlar los poderes y derechos del nuevo obispo, estableciendo para ello las llamadas «capitulaciones electorales» o «acuerdos», tomados de común durante el período de sede vacante.

En esta época (s. XIII) el Cabildo salmantino tiene ya recia personalidad en el campo jurídico, económico y administrativo. Su potencial económico e intervenciones en el gobierno de la diócesis le convierten en uno de los organismos de mayor transcendencia e influjo en la vida de la ciudad y de la diócesis.

La amplitud de los privilegios reales y pontificios y el fuerte patrimonio económico adquirido a base de donaciones, compraventas, fundaciones, etc. dio a esta corporación y a sus miembros autonomía e independencia casi absoluta respecto del propio Obispo. Tal independencia económico-administrativa y aun jurisdiccional, surgida —como dijimos antes— a raíz de la división del patrimonio común y, perteneciente hasta entonces indistintamen-

te al Obispo y al clero benefical, acarreó serias anomalías y desórdenes de tipo jurisdiccional y económico-social. Parte del clero empezó a sentirse desvinculado de la vigilancia y cuidado de su prelado por carecer, en unos casos, de retribución segura y, en otros, por depender de los exiguos emolumentos que producían las capellanías más pobres y beneficios mal dotados.

Los Obispos de Salamanca, al igual que otros de distintas diócesis de la Iglesia española y la propia Curia Romana, procuraron —a base de concordias, estatutos, reglamentos, etc.— resolver las frecuentes distensiones y graves diferencias inevitablemente producidas en la labor administrativa y roce del prelado con el cuerpo capitular.

La autonomía jurídica —casi omnimoda— y poderío económico del Cabildo, defendidos a ultranza por los canónigos y beneficiados de la catedral salmantina —aparte de los desórdenes económicos y jurisdiccionales a que antes aludíamos— trajo consecuencias, a veces, positivas y, las más, de signo negativo, para la vida moral y religiosa del clero y pueblo salmantino.

La idea y concepto del Obispo: «padre y pastor» de toda la diócesis, lentamente se va desvirtuando por influjo del feudalismo medieval y, con el tiempo, llegará a confundírsele con el señor feudal, ocupado —como cualquier noble— más en la administración de las rentas que en el gobierno y cura pastoral de sus diocesanos.

A la falta de una legislación clara y de alcance general para toda la Iglesia en asuntos jurisdiccionales, materia benefical, reservas pontificias, privilegios, etc., se unía la lentitud en la provisión de las sedes vacantes y, sobre todo, la falta de contacto directo de los prelados con su clero y pueblo, proveniente, unas veces, de su alejamiento físico y, otras, espiritual y moral. Todas estas circunstancias dieron pie a los cabildos para reforzar y consolidar su posición privilegiada. Lo que en un principio fue simple potestad delegada, más tarde se interpretó y consideró como ordinaria, estable, perpetua e independiente del Obispo.

Por otra parte, la adquisición de una canonjía o beneficio de primer rango como lo eran los catedrales, suponía un honor y una posición excepcional de tipo económico-social para cualquier clérigo. De ahí, que en ocasiones los Obispos y —a veces los reyes y nobles— dejándose llevar del nepotismo o de sus intereses personales, tratasen de controlar los amplios privilegios o de participar en las pingües rentas, pertenecientes a estas corporaciones.

Con frecuencia, los Obispos —a imitación de la Curia pontificia— intentaron aumentar el número de beneficios o presionaron cuanto pudieron para introducir en las «canonjías de oficio» y «dignidades» a sus feudos y hombres de confianza.

Tanto el Cabildo catedral como el Cabildo de párrocos o Clerecía de San Marcos que agrupaba al clero parroquial y benefical de la ciudad, e, igualmente, otros cabildos rurales v. gr. el de Alba de Tormes, Ledesma, Medina del Campo, etc., sostuvieron constantes pleitos económico-administrativos y jurisdiccionales (s. XII-XIV) con los Obispos, con los ayuntamientos, monasterios, cofradías..., no sólo por sostener sus privilegios, sino, principalmente, por impedir la disminución de sus rentas, cada vez más menguadas.

Cuando el Cabildo catedral —la corporación eclesiástica más fuerte y representativa de la Salamanca del s. XIII— vio en peligro sus derechos e intereses económicos por intromisiones, que consideraba indebidas, por injustas o contrarias al derecho común, al derecho particular o a sus normas y costumbres, no dudó en oponerse al Obispo, litigando con él y acudiendo —cuando fue preciso— al metropolitano, a la Curia romana o a la autoridad civil.

No faltaron ocasiones en la historia de la diócesis de Salamanca en que este Cabildo, formado por hombres cualificados y relevantes en el campo del Derecho y de las ciencias sagradas, llegó a tener mucha más autoridad y prestigio que el propio Obispo, hasta el punto de anular determinadas actuaciones episcopales si no iban respaldadas por el asentimiento o aprobación previa (según los ca-

sos) mediante el voto consultivo o deliberativo de los capitulares.

Las frecuentes intervenciones de la Curia Romana en asuntos administrativos y jurisdiccionales de la Iglesia salmantina se deben, en la mayoría de los casos, a este forcejeo constante entre el Obispo, por una parte —que trata de conseguir su independencia y autonomía personal, controlando y gobernando las actividades y bienes de las distintas corporaciones enclavadas en su territorio— y el Cabildo catedral, por otra, que viéndose consolidado, no se contenta con la resistencia y oposición a lo que consideraba intromisiones y excesos del poder episcopal, sino que aprovechando toda clase de coyunturas favorables, a veces sin escrúpulos, intenta por todos los medios ampliar las facultades de la corporación en provecho de los propios capitulares.

Desde este contexto histórico se comprende fácilmente que tanto el Cabildo catedral de Salamanca (a. 1245) como los de Valladolid y Avila (a. 1250), Calahorra y Santo Domingo de la Calzada (a. 1252) Segovia, Burgos y Plasencia (aa. 1247-1254)..., acudieran a la autoridad pontificia para que ésta aprobase, por primera vez, sus estatutos o confirmase los antiguos, reiterando y ampliando en lo posible las ventajas procedentes del derecho fundacional, de un privilegio particular o de la mera costumbre.

En el texto de la constitución salmantina no se hace la menor alusión a ninguna petición o súplica formulada por el Obispo o por su Cabildo catedral. Sabemos, sin embargo, que esta vieja corporación se regía por estatutos y normas o costumbres particulares que, a juzgar por el documento que estudiamos, en unos casos eran distintas y, en otros, opuestas al derecho general de la Iglesia universal, ratificado en los concilios III (a. 1179, can 13) y IV (a. 1215, cans. 28, 29) de Letrán y recogido, más tarde, en las Decretales de Gregorio IX (c. 4, «De Conc. prebend.», 8, 3).

Pienso —y apoyo mi afirmación en la personalidad, respeto y fama de virtud y ciencia de que

aparece revestido el Obispo D. Martín (aa. 1229-46) a quien clero y pueblo llamaba «Magister»— que fue este sabio prelado salmantino, más que el propio Cabildo, quien decididamente influyó en el Papa Inocencio IV, para que éste, una vez informado del estado general de esta iglesia local y de los problemas surgidos entre la jurisdicción ordinaria episcopal y la excepcional y privilegiada del Cabildo, encomendase a la Curia Romana el estudio y medidas a tomar en asunto tan trascendental y espinoso para iniciar la deseada reforma.

Desde el punto de vista jurídico-diplomático la constitución del Cardenal Gil Torres va dirigida al titular de la diócesis, a la primera autoridad del cuerpo capitular: el Deán, y al propio Cabildo catedral, órgano asesor y máximo colaborador del Obispo en las tareas de gobierno y administración de la Iglesia diocesana.

El Cabildo catedral de Salamanca ocupaba —por razón de su personalidad, autonomía, influjo y poderío— un lugar preeminente en la organización jerárquica de esta iglesia local y, quiérase o no, los Obispos y la propia Curia pontificia estaban convencidos de la necesidad de contar con su colaboración corporativa y con la personal, tanto de sus miembros más distinguidos: *dignidades* y *canónigos de oficio*, como del cuerpo subalterno de *beneficiados*, *párrocos*, *capellanes*..., adscritos a las distintas parroquias, fundaciones y capellanías de la ciudad y de los pueblos. A todos ellos —de forma directa o indirecta— llegaba la jurisdicción del Cabildo y sin su colaboración difícilmente podría llevarse a cabo el proceso de reforma general y vitalización de la Iglesia programado por Inocencio III en el IV Conc. de Letrán (a. 1215).

Por otra parte, la temática o contenido textual de la citada constitución trata, en primer lugar, de los asuntos económico-administrativos y jurisdiccionales más importantes en cuanto a magnitud, trascendencia y repercusión en la vida y actividades de la diócesis.

Una problemática tan compleja —como era la delimitación de jurisdicciones, la centralización y

descentralización de los poderes del Obispo, del Cabildo y de sus miembros más preclaros, la fijación del número de beneficios y provisión de los mismos, el reparto proporcional de frutos y rentas eclesiásticas, control del clero..., con profundas manifestaciones y resonancia en el orden social, económico, religioso y moral, no ya en una o en algunas personas físicas o morales enclavadas en el amplio territorio diocesano, sino en todas o en la mayor parte de las instituciones y personal responsable de las mismas —sólo podía darse en una corporación bien compacta, dotada de personalidad y autonomía y con amplio influjo en el gobierno y marcha de la diócesis, y ésta —en pleno s. XIII— no podía ser otra sino el Cabildo catedralicio.

Controlar y reformar la vida y costumbres, derechos y actividades, poderes y privilegios del Cabildo era situar a toda la Iglesia salmantina dentro del gran proceso de reforma y vitalización. De ahí que la constitución trate, en primer lugar y preferentemente, del Cabildo catedral y sus problemas, para extenderse después a todo el clero parroquial y benefical (dependiente de algún modo del Obispo y del Cabildo) encargado del culto y de la «cura animarum» en la totalidad de las parroquias, capellanías, fundaciones, etc., urbanas o rurales.

Como datos interesantes de tipo histórico, social y económico, e indispensables para el conocimiento de la vida y actividades de la primera institución (Cabildo) y de la organización administrativa y régimen de la totalidad de esta iglesia local, entresacamos del texto constitucional algunos aspectos sobre número de canonjías y beneficios catedralicios, provisión de los mismos, distribución de los frutos y rentas eclesiásticas, división territorial del obispado en arcedianatos y arciprestazgos, etc. etc.

La constitución egidiana fija en 26 el número de canonjías, divididas en tres categorías: a) *dignidades* (un Deán, cuatro Arcedianos, un Chantre, un Tesorero y un Maestrescuela); b) *canónigos de oficio*, sin especificación de número ni de oficios; c) *beneficiados* o *canónigos simples*, sin especificar.

Estos 26 miembros, denominados «capitulares» constituían el Cabildo propiamente dicho, que en lo sucesivo se formaría, preferentemente, por el clero diocesano perteneciente al «*cuervo auxiliar de beneficiados*».

A raíz de este ordenamiento, la provisión y colocación de las dignidades y canongías de oficio correspondería al Obispo y al Cabildo, excepto los cuatro «arcedianatos», que por costumbre se reservan a solo el prelado, ateniéndose en cuanto a la provisión y colocación de todos ellos a las normas establecidas en el derecho general y a las disposiciones particulares del Conc. IV de Letrán (cáns. 28, 29).

Al «*cuervo auxiliar de beneficiados*» o «*servidores del coro*» de la Catedral —compuesto por 20 miembros— podría acceder, en lo sucesivo, cualquier beneficiado, a ser posible, diocesano tanto de ciudad como de los pueblos, valorando —a la hora de la admisión— sus cualidades, méritos y antigüedad.

Por lo que se refiere a la distribución de rentas y salarios del clero catedralicio y beneficiados en general, la constitución establece:

1) Las «*dignidades*» tendrán un sueldo base, igual para todas, formado por los frutos de la canongía, por las distribuciones diarias y otros reparos procedentes del beneficio, donativos, etc., y un sueldo complementario («*praestimonium*») desigual, en razón de la categoría del cargo y oficio que desempeñen. En concepto de préstamo complementario o subvención, el Deán recibirá 350 maravedís; los cuatro Arcedianos, 300 mrs. cada uno; el Chantre, 250 mrs. y 150 mrs. el Tesorero y el Maestrescuela.

2) Los «*canónigos de oficio*» y los «*canónigos simples*» o «*beneficiados*», además del vestuario, frutos del beneficio y repartos cobrarían de complemento o asignación 80 mrs.

3) Para el «*cuervo benefical inferior*» («*servidores de coro*») de la catedral y demás beneficiados parroquiales o adscritos a fundaciones y capellanías urbanas o rurales, se establece como renta

base los frutos diarios del beneficio más los reparos acostumbrados y un complemento (asignación episcopal) de 40 maravedís.

Se faculta al Obispo para que, en caso de sobrar algún dinero del llamado sueldo o paga complementaria, procedente en su mayoría de los diezmos, pueda conceder subvenciones mayores, según el merecimiento y necesidad de cada canónigo o beneficiado, procediendo siempre con justicia y equidad. Una vez reglamentado el acceso a los principales oficios y cargos eclesiásticos y resuelto el problema económico de la sustentación material del clero, mediante la severa prohibición de la acumulación de beneficios y un reparto más equitativo de los frutos, rentas y aportaciones eclesiásticas, el Cardenal Gil Torres establece una serie de normas (ordenanzas) encaminadas a la reforma del clero, a la dignificación del culto y a la promoción del celo sacerdotal y cuidado pastoral.

Para conseguir estos fines se prescribe la obligatoriedad de la residencia canónica en el lugar en donde radique el beneficio, el cumplimiento de obligaciones y levantamiento de cargas anejas al oficio, la ejemplaridad de vida y costumbres, gran diligencia y atención en la celebración del culto y demás deberes ministeriales, corrección y vigilancia del clero, cumplimiento y ejecución de estas ordenanzas por parte del Obispo, de sus colaboradores directos y de sus delegados, etc., etc. A lo largo del texto se pone de manifiesto la importancia de algunos cargos eclesiásticos sobre los cuales recaía de modo especial el gobierno y administración de la diócesis.

Aparte del Obispo —autoridad máxima y guía principal de la iglesia local— aparecen como colaboradores directos en lo relativo al culto y personal adscrito a la catedral, el *Deán* o decano, como representante del Cabildo; el *Chantre*, responsable del oficio coral y del canto; el *Tesorero*, encargado de la custodia y administración de las alhajas, vasos sagrados, reliquias, tesoro artístico, caudales, etcétera, de la catedral y el *Maestrescuela*, jefe de los maestros (profesores) y gobernador de los es-

tudios o escuelas catedralicias y de la propia Universidad. En numerosas catedrales (s. x-xii) el *Maestrescuela* fue el encargado de redactar y escribir —a modo de notario-secretario— la documentación oficial, tanto del Obispo como del Cabildo.

Como coordinadores —de las actividades pastorales y encargados de la administración temporal de los bienes eclesiásticos, de la planificación y vigilancia del clero parroquial y benefical y, sobre todo, del control de los aspirantes al sacerdocio o a ocupar los beneficios vacantes, tanto en la ciudad como en los pueblos— figuran los *Arcedianos*, auténticos vicarios episcopales con amplísima jurisdicción, al frente de los cuatro «arcedianatos» o zonas territoriales en que hasta la fecha de la presente constitución estaba dividida la diócesis y que más tarde se reducirían a tres. En el documento se citan expresamente dos: el *arcedianato de Salamanca*, «que por ser el más rico no precisa de subvención especial» y del que debería desmembrarse el llamado «arcedianato del otro lado del río» para unirse con las vicarías de Monleón y Miranda al de *Ledesma* («el más pobre en recursos»). De los otros dos: el de *Alba de Tormes* —más tarde denominado de Alba y Salvatierra— e igualmente del de *Medina*, nada se dice.

La zona de La Valdobra («Vallis de Opera») —exenta desde antiguo y sometida aun en lo espiritual directamente al Deán y Cabildo catedral— continuaría bajo su control, correspondiendo a aquellos el nombramiento anual de dos visitadores que al mismo tiempo que realizan la visita canónica corrijan y reformen cuanto sea preciso en las distintas parroquias, capellanías, beneficios, etc., enclavadas en el valle del río Huebra¹².

En plano intermedio, entre los «Arcedianos» o vicarios episcopales de zona y el clero llano, formado por párrocos, beneficiados, capellanes..., estaban los «Arciprestes»: urbanos, rurales o plebanos, simples presbíteros sin jurisdicción especial, a quie-

nes se encomendaba la inspección del clero perteneciente a cada arciprestazgo. Los *Arcedianos* solían encomendar a estos Arciprestes la supervisión de ciertas causas y dispensas matrimoniales, el control y notificación de ausencias y vacantes, reparto de ingresos, etc.

Al mal uso de sus atribuciones, a su poca ejemplaridad de vida y a los constantes excesos de algunos «Arciprestes» en las respectivas áreas territoriales se atribuye, en buena parte, la relajación, indisciplina y discordias del clero.

Pienso, sin embargo, que una de las causas principales de esta crisis sacerdotal —tan acusada en Salamanca durante el s. XIII— fue el excesivo número de clérigos sin oficio ni beneficio y, sobre todo, la exigüidad de las rentas o frutos provenientes de gran parte de los beneficios o cargos eclesiásticos (en muchos casos insuficientes para una subsistencia decorosa) que obligaba a la acumulación de prebendas y cargos retribuidos.

NORMATIVIDAD TEXTUAL.

Una vez justificada la intervención pontificia y delineado el alcance de la constitución y ordenanzas en sus principales facetas: jurídica, socio-económica, administrativa y religiosa, pasamos a exponer en forma esquemática los hechos y circunstancias que a juicio de la autoridad delegada (Cardenal Gil Torres) habían provocado esta relajación y malestar general entre el clero y pueblo salmantino, señalando como contrapartida el articulado de medidas dispositivas que el legislador superior adopta, tanto para cortar la raíz y causas del mal, como para facilitar la reforma eclesiástica en esta iglesia local.

Las causas principales de esta situación anormal —que por injusta y escandalosa ofende y desprestigia a la propia Iglesia, al clero y a la virtud de la religión— son las siguientes:

12. A. RIESCO TERRERO, a. c., p. 655.

a) El favoritismo e incumplimiento de las normas canónicas por parte de la autoridad en la asignación y provisión de beneficios eclesiásticos, al no tener en cuenta las virtudes, méritos y servicios de los candidatos, dando preferencia a sus feudos y a los extradiocesanos y no cubriendo a tiempo las vacantes.

b) La acumulación de beneficios y rentas (catedralicias y parroquiales) en determinadas personas, la no equitativa y proporcional distribución de los bienes eclesiásticos y la apropiación indebida de ciertos impuestos, tasas y derechos extraordinarios, llevada a cabo por el clero alto y, sobre todo, por los Arcedianos y Arciprestes.

c) La negligencia y, a veces, absentismo de numerosos clérigos en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones sacerdotales y eclesiásticas, especialmente en lo tocante al ministerio del altar (culto público), oficio coral, observancia de la residencia canónica y levantamiento de cargas anejas al oficio pastoral y benefical.

d) Abuso de autoridad y frecuentes intromisiones por parte de quienes ostentaban cargos de responsabilidad dentro del Cabildo v. gr. Obispo, Deán, Tesorero, Chantre..., o fuera de él, en parroquias, capellanías y beneficios tanto urbanos como rurales v. gr. los Arcedianos y Arciprestes.

e) Los conflictos y luchas frecuentes entre Obispo y Cabildo y entre éste y los beneficiados parroquiales o rurales sometidos directa o indirectamente a su jurisdicción, especialmente, los adscritos a las parroquias del valle del Huebra (Valdobra), donde el Deán y Cabildo ejercían la jurisdicción eclesiástica en forma privativa y sin sujeción al Obispo local.

f) El desprestigio y corrupción de algunos clérigos carentes de vocación o que por falta de vigilancia y corrección se hallaban inmersos en la simonía o retenían pública y descaradamente concubinas.

Para atajar estas injusticias y desórdenes, que inevitablemente engendraban el escándalo, la murmuración, el empobrecimiento y relajación del clero y, sobre todo, el desprecio y la desconfianza del pueblo fiel hacia la Iglesia y sus legítimos representantes, se establecen las siguientes disposiciones:

1) La provisión de las canonjías —tanto las llamadas de «oficio» como las de «dignidad»— y los «beneficios simples» dependientes de la catedral se registrarán no por los usos y costumbres locales sino por las normas establecidas en el derecho general de la Iglesia y por las disposiciones complementarias del Concilio IV lateranense (a. 1215). En la provisión y colación de cualquiera de estos beneficios, el Obispo sólo, o en su caso el Obispo y Cabildo, procederán con toda equidad y siempre conforme a derecho, dando preferencia a los diocesanos —si reúnen las condiciones— y valorando sus méritos en razón de los servicios prestados, antigüedad e idoneidad para el cargo.

2.^a La inobservancia de cualquiera de estas normas de derecho natural: justicia, equidad, méritos..., o positivo: orden establecido, precedencia, plazo, competencia..., privaría al Obispo del derecho a conferir el beneficio, quedando sin efecto el acto por él realizado y, en consecuencia, invalidada la colación.

3.^a) Para conseguir un reparto equitativo de las rentas eclesiásticas y de otros recursos procedentes de donaciones pías, fundaciones, limosnas... —evitando, por un lado, el enriquecimiento de los mejor situados, y por otro, el estado de miseria vergonzante de muchos beneficiados simples y de otros servidores de las iglesias más pobres— se establece un arancel con el baremo de ingresos para los diversos grupos: *dignidades, canónigos de oficio, canónigos simples* y *beneficiados*: urbanos y rurales.

4.^a) Con el fin de vitalizar el culto público —en pleno desprestigio y semi-abandono, a causa de la negligencia y desidia del clero benefical— el

legado pontificio pide encarecidamente a todos los sacerdotes: «que sean cuidadosos, diligentes y atentos en el ministerio diario del altar (celebración de la misa), en los deberes del coro y de la iglesia y en la celebración de los oficios divinos». Tras esta petición, el Cardenal Gil Torres manda que el Chantre o Vicechantre confeccione diariamente una lista, bien ordenada y por turnos, con los nombres de los oficiantes, ministros, cantores, etc., a quienes corresponda actuar en la misa capitular y demás oficios de la iglesia catedral. La ausencia injustificada y la apropiación indebida de los frutos se castigarán conforme a las costumbres o estatutos peculiares de la catedral, pero si se tratara de reincidentes, el Obispo deberá obligarles a prestar el servicio cotidiano de la iglesia, privándolos, por seis meses, de los frutos beneficios y si el caso entraña especial gravedad, osadía o indolencia, quitándoles el beneficio a perpetuidad.

5.^a) Al Obispo y a sus delegados: el Deán, Chantre, Maestrescuela, Tesorero y Arcedianos corresponde la vigilancia y exacto cumplimiento de estas normas, tanto en lo que se refiere a la celebración del culto, corrección e imposición de penas a los negligentes, concesión de permisos, control de ausencias..., como en la administración de bienes, derechos de visitas, cobranzas, repartos, etc. Quienes abusando de su autoridad o cargo dejen de cumplir lo preceptuado o se excedan imponiendo exacciones o gravámenes injustos serán castigados con las penas establecidas en el Conc. III de Letrán y las que se establezcan en el general de Lyon (a. 1245), sin que el Obispo pueda perdonar o dispensar.

6.^a) El Deán y Cabildo nombrarán cada año —como es costumbre— dos visitantes «leales y prudentes» para que corrijan y reformen los graves defectos existentes en la jurisdicción de La Valdobla obligando a los párrocos y beneficiados de este territorio a residir en sus respectivas parroquias y beneficios, atendiendo el culto público y, sobre todo, a vivir honestamente, ejerciendo con solicitud el ministerio pastoral.

7.^a) Se decreta e impone, bajo pena de privación de la totalidad de los frutos beneficios, la observancia de la residencia continua (salvo en caso de dispensa justa o de grave y urgente necesidad) a todos los canónigos (dignidades, de oficio y simples) y beneficiados urbanos y rurales. Sólo por razón de estudios, el Obispo y el Cabildo podrán dispensar, hasta un período de cinco años, de la obligación del coro y demás servicios a la iglesia y, también de la residencia temporal a aquellos beneficiados que por sus cualidades parezcan más aptos y útiles para la Iglesia.

8.^a) Se declaran totalmente inválidas y sin efecto, para lo sucesivo, todas las actuaciones realizadas contra derecho por Arcedianos y Ariciprestes tanto en lo que se refiere a las dispensas matrimoniales, presentación de clérigos y concesión a los mismos de cartas comendaticias para su ordenación por prelados extradiocesanos o para la colación de beneficios, así, como los traslados por sorpresa y encargos temporales de capellanías y parroquias e, igualmente, el reparto caprichoso de frutos y la imposición de exacciones y tributos arbitrarios.

9.^a) La vigilancia y cuidado diligente del clero benefical y parroquial no catedralicio estará a cargo del Obispo, quien, a través de los Arcedianos y controlando directamente sus actuaciones, corregirá con la debida severidad los excesos públicos de los clérigos, especialmente, la simonía y el amancebamiento, por ser estos vicios los que más los envilecen y deshonoran. El incumplimiento, con negligencia o desidia, de este deber pastoral colocaría al Obispo de Salamanca bajo las sanciones canónicas decretadas en los concilios lateranenses (III y IV) y las que se dictaminen en el general de Lyon, cuya concreción decidirá el concilio anual que deberá celebrarse en cada provincia.

10.^a) Una vez prohibida la acumulación de beneficios y puesta en práctica esta norma en todo el territorio diocesano, los frutos e intereses de los beneficios de las distintas vacantes en iglesias ur-

banas o rurales, se aplicarían en provecho de las propias iglesias y del clero que las atienden, nunca en pro de Obispo ni de los Arcedianos o Arciprestes.

Tanto el Obispo como los Arciprestes se abstendrán de suprimir los beneficios vacantes de cualquier iglesia parroquial y no podrán aplicar los frutos de aquellos en provecho propio. La infracción de esta norma y la morosidad injustificada en la provisión de las vacantes por parte del Obispo y Arcedianos implicaría grave negligencia en ellos y, al mismo tiempo, supondría gran perjuicio para las iglesias, por lo cual una vez detectado el abuso recaería el derecho de proveer en el propio Cabildo y en su defecto en el Obispo metropolitano.

11.^a) La interpretación y aclaración de los puntos oscuros o dudosos, relativos al contenido y aplicación de las normas que se insertan en la presente constitución, corresponden a la Sede Apostólica «por residir en ella autoridad y poderes especiales para juzgar sobre la equidad y derecho».

La falta de precisión jurídica y enorme farragosidad expositiva de este escrito, elaborado con excesivo tecnicismo, nos ha impedido, en unos casos, profundizar y, en otros, matizar sobre algunos problemas y cuestiones que laten en el documento. Pero esto nos llevaría demasiado lejos y sólo podrían resolverse a base del cotejo de otras constituciones y documentos similares emanados por Inocencio IV y de un conocimiento minucioso de la legislación general de la Iglesia y del derecho particular (derecho consuetudinario) de la iglesia catedral del Salamanca a mediados del s. XIII, procedente, sin duda, de las prerrogativas fundacionales, de las concordias y acuerdos habidos a lo largo de los siglos con los distintos Obispos y de las generosas concesiones y privilegios otorgados por papas y reyes.

DESCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA.

Se trata de un documento original en pergamino áspero y forma rectangular de 580×660 mm. no

muy bien conservado. A simple vista se aprecian en él varios cortes, sobre todo, en las dobleces del lateral izquierdo —que está muy sobado— y algunos agujeros en la parte central del texto. El manejo frecuente de este documento con 52 líneas bien espaciadas —excepto la última que recubre la estrecha doblez o plica de la que pende el sello pontificio— ha perjudicado bastante su escritura que a causa del roce y constante utilización se halla muy desvaída y, en algunos trozos, ilegible o totalmente desaparecida. Los recortes laterales sufridos a lo largo de los años, especialmente en el borde izquierdo, hacen imperceptibles los incipits de algunas líneas, cuyos extremos han sido marcados, en época reciente y a modo de pautado, con puntos marginales, rayas y pequeños signos angulares.

Escrito en bella minúscula diplomática con las características estilizaciones de la Cancillería pontificia (s. XIII) acentuadas, sobre todo, en el protocolo inicial, por razón de su tipología diplomática. La letra es muy caligráfica, de trazo vertical, bastante suelta, más alta que ancha, con buena separación de las palabras y no muy facetada.

Destacan los astiles de fino perfil y los caídos con sus rasgos largos y estilizados. Los astiles de la *b*, *l*, *h*, rematan en amplias curvaturas hacia la derecha, mientras los caídos de la *q*, *g*, *p* —bastante pronunciados—, suelen curvarse hacia la izquierda en forma arqueada o de amplio rasgueo horizontal.

El palo de la *d*, que en base se inclina hacia la izquierda, termina volviéndose hacia la derecha.

Es normal el uso de dos tipos de *s*. La de doble curvatura en iniciales mayúsculas y, sobre todo, en posición final, y la larga en posiciones inicial y media.

La *s* larga y la *f* tienen graffas muy parecidas. Los astiles de ambas terminan en arcos redondeados poco amplios y, a veces, cerrados o adornados con sutiles filamentos; también curvan sus caídos, pero prolongándose hacia arriba, por la izquierda.

En cuanto a la *i* se observan tres graffas: *alta* en mayúscula inicial, *corta* o *normal*, dotada o no de punto diacrítico, y *larga* o *baja* semejante a la *j*

moderna en terminación de palabra o cuando sigue a otra *i*.

Las letras *m*, *n* —en posición final— y lo mismo el caído de la *h*, prolongan su último trazo hacia adentro (izquierda).

La *t*, en fin de palabra, tiende a la grafía de la tau griega, mientras que en otras posiciones su astil vertical excede algo al travesañ horizontal.

Además del alfabeto minúsculo con abundantes trazos adventicios y bien perfilados, el escriba utiliza caracteres capitales y unciales con reduplicación de trazos y adornos de sabor insular, especialmente en nombres propios, en títulos y en las mayúsculas después de punto.

Los nexos principales que se advierten son: *ct* y *st*; el primero con bastante separación entre ambas letras, máxime en la primera línea del protocolo, y el segundo con arco o puente de enlace redondeado de cierta amplitud.

El *et* se representa —por lo general— mediante el signo tironiano en forma de $\succ$ y, menos frecuentemente, por ambas letras en grafía normal.

Las abreviaturas son abundantes. Se utilizan principalmente los sistemas de la contracción y el de la suspensión terminal. Son raras —y casi exclusivas de los nombres propios y numerales romanos— las siglas.

Como signos abreviativos con valor genérico aparecen: la raya horizontal o un poco ondulada y, más frecuentemente, el lazo anudado en forma de 8 abierto por abajo. Tienen valor específico los signos representativos de: *per*, *pre*, *pro*, *que*, *quid*, *quod* y *vel*, de idéntica grafía a los empleados en las escrituras nacionales y en la letra carolina; la *c* invertida en fin de palabra y a modo de 9 exponencial para el *-us* y *-um*; una especie de *r* volada, de pequeño módulo y forma redondeada para el *-ur*; el punto y coma o semicolon y la zeda en forma de 3 con base muy prolongada, ambos en final de palabra y con valor de *ue*, *et*, *ed* y *us*; un signo sobrevolado y zigzagueante parecido a un 4 estrecho y anguloso para las sílabas: *ir*, *ri*, *er*, *re*; y finalmente, la *r* de cabeza redonda y con amplia cola ho-

rizontal cortada por trazo oblicuo para el *-rum* final.

Por razón de la ornamentación, rasgueos y estilizaciones a pluma, con finísimos filamentos caligráficos, merece destacarse la gran inicial (I) del nombre del Papa que encabeza el documento. Su cuerpo —que sobrepasa la caja de escritura con invasión del margen superior— es amplio y erguido. Finos adornos caligráficos recubren sus bordes y espacios intermedios. La base de esta gran inicial se prolonga hacia abajo en vistosa y ondulante cola con finos rasgueos y flotantes estilizaciones que sangran el texto y borde izquierdo hasta la línea séptima.

Estas estilizaciones, rasgueos, trazos y filamentos adventicios, se observan también, aunque en menor proporción, en las mayúsculas capitales y unciales y en algunas minúsculas, sobre todo, de la primera línea del protocolo.

En el dorso o vuelto —parte central superior del documento— se aprecia la «nota registrationis» precedida del nombre del cardenal delegado: «*Egidius*». Dicha nota de registración está formada por una *R* capital de gran tamaño y un signo ondulado que corta su trazo terminal derecho. En el amplio espacio de la curvatura superior de dicha *R* van inscritas estas letras: «*scpit*». Las demás notas e inscripciones dorsales son relativamente modernas y de escaso interés paleográfico y diplomático.

El texto latino —sin puntuación definitiva y con algunas incorrecciones— no es demasiado claro. Algunos pasajes parecen corrompidos, o, al menos, dudosos. Se trata de un latín oficial, aprendido en escuela, bastante pretencioso y lleno de artificios que no da cabida a expresiones o giros populares. Resulta difícil fijar con exactitud el sentido de algunas frases y mucho más precisar el valor de ciertas partículas (conjunciones, adverbios o expresiones adverbiales) y palabras de corte jurídico. A pesar de todo, la estructuración general del doc. está calcada en modelos cancillerescos y responde a la práctica habitual de los *instrumentos* públicos, adecuándose perfectamente, en cuanto a estilo y

lenguaje, a los formularios de la Cancillería pontificia y a otros escritos de idéntico contenido emanados por el propio Inocencio IV durante su estancia en Lyon.

Si comparamos la escritura del diploma original con la empleada en el registro, observamos que la letra de aquel es más solemne (cancilleresca), más amplia y esmerada. En el Reg. Vat., como es lógico, no se exornan las letras de la primera línea del protocolo, no se espacian excesivamente los renglones y, por supuesto, desaparecen los amplios y característicos ligados *ct*, *rt*, *st*, etc. La grafía, de una y otra fuente, mantienen las típicas diferencias de ángulo, peso, módulo, inclinación, cursividad...

Todos estos detalles y otros de tipo ornamental, estético, ortográfico (mayúsculas, iniciales, etc.) obedecen a normas fijas establecidas por la cancillería, reduciéndose bastante cuando se trata de copias insertas en los registros oficiales.

TRANSMISIÓN TEXTUAL Y ANÁLISIS DIPLOMÁTICO.

La transmisión documental («tradición documental») es uno de los capítulos más importantes de la Diplomática general. A ella corresponde conocer cómo se nos ha transmitido el texto documental y decidir si éste ha llegado a nosotros en forma original, es decir, tal y como salió de la mano de su autor, sin alteraciones en cuanto al texto («voluntas auctoris»), materia y forma, en cuyo caso recibe el calificativo de *documento original, auténtico, arquetipo, genuino...*, o por el contrario sí, el texto conservado es una reproducción manuscrita (fotográfica o tipográfica), más o menos perfecta, del original; en este caso, se le designa con el nombre de *copia, traslado o simple reproducción*.

Aunque normalmente a un negocio o asunto jurídico corresponde un solo original o un original de primer grado y, tal vez, alguno más de segundo o

tercer grado, sin embargo, en los contratos bilaterales (contratos onerosos), en ciertas disposiciones y decretos destinados a varias personas y, a veces, por razón de comodidad o a petición del destinatario («parte») y para mayor seguridad, se confeccionan y existen varios originales de un mismo asunto (documento).

Algo parecido ocurre con las copias, que pueden ser coetáneas o no del original, únicas (individualizadas) o múltiples (colectivas, transcritas en libros), gozar de plena validez jurídica y probativa, como son las copias auténticas o «vidimatas», los traslados notariales y las procedentes de registros de cancillerías, o tener un valor relativo y bastante limitado aun desde el punto de vista histórico como acontece con las copias simples, imitativas o sacadas de cartularios, becerros, etc., carentes, casi siempre, de todo signo de validación e inferiores a las originales en cuanto al tiempo, credibilidad jurídica, histórica y, sobre todo, diplomática.

La constitución salmantina de 1245 ha llegado a nosotros por doble camino: a) mediante el diploma catedralicio (original) y diferentes reproducciones del mismo y b) a través del Registro Vaticano.

Al primero lo calificamos de original por sus caracteres extrínsecos e intrínsecos (texto, partes integrantes del doc., materia, pergamino, forma genuina, fórmulas jurídicas, lengua, estilo, escritura, signos de validación, sellos, datación, anotaciones dorsales, etc.) que encajan perfectamente con la estructura cancilleresca, estilo y época de otras constituciones pontificias similares emanadas durante el s. XIII por Inocencio IV.

El Prof. Batelli aplica el calificativo de copias solemnes, «transcripta» o «transumpta authentica», «copias vidimatas» o «vidimus» a determinados documentos solemnes de carácter político transcritos en la ciudad de Lyon (a. 1245) con motivo del concilio I.º de este nombre¹³.

13. G. BATELLI, *I transunti di Lioni del 1245*, «Mitteilungen des Instituts für Geschichtsforschung» 62 (1945)

336-364. Este trabajo ha sido reeditado en *Scritti scelti. Codici, Documenti, Archivi*, Roma 1975, pp. 173-201.

Aunque la citada constitución no pertenece al grupo de las copias de excepcional valor expedidas en la histórica sesión (17 julio 1245) del Conc. de Lyon, a que se refiere el Prof. Batelli, no habría ningún inconveniente en admitir para ella el calificativo de copias auténticas o «vidimus», si entendemos por tal la renovación, mediante inserción y confirmación solemne, de un original preexistente.

Diplomáticamente hablando el documento catedralicio (diploma) es un original especial, ya que procediendo —como autor inmediato— del Cardenal delegado, Gil Torres, se reviste, mediante intervención de Inocencio IV (mandante) y de su cancillería, de la solemnidad y publicidad debida y teniendo a la vista el primitivo original (minuta o imbrevisatura pública del Cardenal), su texto se renueva por la inserción y expresa confirmación, al transcribirse, por mandato de la autoridad suprema, en nuevo instrumento jurídico.

Se trata por tanto de la renovación (a corto plazo de la primera redacción) de un original, cuya minuta oficial o texto primitivo fue redactado por un delegado pontificio, texto, que por voluntad expresa del Papa, se renueva ahora en un nuevo instrumento, tan original como el primero, mediante el sistema simultáneo de la «renovatio per insertionem integram et per confirmationem auctoritatis superioris».

La gran R dorsal con las debidas suscripciones

y anotaciones cancllerescas, existentes en el pergamino conservado en Salamanca son un indicio claro de su originalidad (de primero o segundo grado) y, sobre todo, de que el documento (constitución) debía transcribirse en los registros de la Cancillería.

A la hora de valorar la copia o «transumptum» («transcripta», traslado) conservada en los Registros Vaticanos surgen varios problemas.

En primer término, cabe preguntarse ¿los Registros de Inocencio IV son originales en sentido estricto (diplomático) o no pasan de copias: auténticas o simples, registradas en libros, con valor histórico-jurídico, no diplomático, de originales?

Una vez solucionado este difícil interrogante quedaría en pie una segunda cuestión —no menos importante y de la que por el momento prescindimos— sobre la prioridad o inferioridad diplomática y valorativa de la copia vaticana respecto de las otras copias existentes en el archivo catedralicio de Salamanca.

La escasez de estudios monográficos sobre el valor de los Registros Vaticanos del s. XIII y, concretamente, los correspondientes al Papa Inocencio IV durante su estancia en Lyon, nos obliga a ser cautos y mantener ciertas reservas.

Especialistas tan acreditados como E. Berger¹⁴, H. Denifle¹⁵, F. Kaltenbrunner¹⁶, P. Rabikauskas¹⁷, P. Kher¹⁸, E. Pasztor¹⁹, H. Hampe²⁰ y G. Battelli²¹ creen que en la actualidad tenemos razones su-

14. E. BERGER, *Les registres d'Innocent IV*, vol. I, París 1881, especialmente en la introducción.

15. H. DENIFLE, *Die päpstlichen Registerbände des 13. Jahrhunderts und das Inventar des selben vom Jahre 1339*, «Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters», 2 (1886) 1-75.

16. F. KALTENBRUNNER, *Römische Studien, Die päpstlichen Register des 13. Jahrhunderts*, «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», 5 (1884) 213-294.

17. P. RABIKAUSKAS, *Diplomática Pontificia* (Praellectio-num lineamenta), Ed. priv. 3.ª, Roma 1970, p. 71.

18. P. KHER, *Papsturkunden in Frankreich und Regesta Pontificum Romanorum*, «Neues Archiv» 14 (1889) 362-376.

19. E. PASZTOR, *Contributo alla storia dei registri pontifici del secolo XIII*, «Bulletino dell'Archivio Paleografico Italiano», ser. III, vol. 1 (1962) 37-83.

20. H. HAMPE, *Aus verlorenen Registerbänden der Päpste Innozenz III, und Innozenz IV*, «Mitteilungen des Inst. für österr. Geschichtsforschung» 23 (1902) 545-567.

21. G. BATELLI, *I trasunti di Lione del 1245*, art. a. c. y sobre todo: «Membra disiecta» di Registri Pontifici dei secoli XIII e XIV», publ. en «Mélanges Eugène Tisserant» IV Studi e testi, Vaticano 1964, pp. 1-34. Ambos artículos han sido recogidos en el libro homenaje al Dr. Battelli, *Scritti scelti* a. c., pp. 173-201 y 315-348, respectivamente.

ficientes para considerar originales a la mayoría de los Registros Vaticanos correspondientes al s. XIII.

Sabemos, sin embargo, que no se conservan íntegros los Registros de Inocencio IV y que al menos el libro correspondiente al año sexto de su pontificado —cuyo texto genuino (original) se contiene en el Ms.lat. 4039 de la Biblioteca Nacional de París— falta en la serie vaticana y la transcripción que guardan los Archivos Vaticanos es una copia del citado manuscrito parisino.

Refiriéndose a las copias («transumpta» o «transcripta») de Lyon (a. 1245), el Dr. Battelli piensa que la serie vaticana fue copiada o registrada en forma de libros a finales del s. XIII, interviniendo en dicha compilación diversos oficiales y escribas bajo la dirección de uno o más delegados de la S. Sede (Cancillería).

Ignoramos —desde el punto de vista crítico y diplomático— si el texto o «transumptum» de la constitución salmantina conservada en la serie vaticana se registró simultáneamente, es decir, en el momento de emitirse el diploma original —cosa poco probable— o más bien, como opinamos nosotros, con algunos años (cuarenta o cincuenta) de retraso, pero teniendo a la vista la cédula matriz o minuta que sirvió de soporte al original preparado por el Card. Gil.

En cualquiera de los casos, el texto registrado (Reg. Vat. vol, 21, ff. 184v-186 v) debe considerarse y clasificarse como copia auténtica, equivalente —al menos jurídica e históricamente— a la copia «vidimata» o «vidimus» con valor de original de segundo orden.

En la transcripción del diploma de la catedral de Salamanca damos en notas las variantes existentes respecto del texto conservado en el Reg. Vat. Como puede observarse, las diferencias son escasas y no cambian la sustancia del texto.

Sin embargo, estas pequeñas diferencias —que por supuesto no afectan al valor del texto transmitido en ambas fuentes (diploma y Reg. Vat.) si se cotejan con minuciosidad aportan valiosos detalles de orden diplomático y, sobre todo, lingüístico, que

matizan y distinguen a una y otra fuente y que abogan claramente por una mayor prestancia, originalidad y valor jurídico-diplomático del documento catedralicio sobre la copia auténtica con valor de «vidimus» o más bien de «copia simple» del Reg. Vaticano.

Para no ser prolijo me limito a señalar las diferencias más notables entre uno y otro texto.

En el Reg. Vat. se omite en la «rúbrica» a uno de los destinatarios principales a quienes va dirigida la constitución: el Obispo de Salamanca, resaltándose, en cambio, la personalidad del Deán y Cabildo.

Las alusiones a la normatividad del próximo Conc. de Lyon (todavía no celebrado) nos obligan a colocar la redacción definitiva del texto («conscriptio») con posterioridad al concilio.

Siguiendo el estilo ampuloso de la Curia, los registradores oficiales, que actúan con un retraso de cuarenta o cincuenta años con relación a la época de confección del diploma original, tratan, por una parte, de ser fieles a la minuta primitiva (matriz, borrador) pero, advierten, por otra parte, la necesidad de acomodarse a la evolución experimentada en el lenguaje (ortografía, grafías inversas o contaminadas, verbos recompuestos, vacilación e inseguridad en el uso de los deponentes, hipercultismos, pleonasmos en el uso de las negaciones y partículas, etc.) hablado y escrito de finales del s. XIII.

Las correcciones, tachaduras, vacilaciones gráficas..., de algunas palabras y frases transcritas en el Reg. Vat. denotan cierta inseguridad en estos escribas (escritores) de oficio, que consideran vulgarismo el empleo de las formas activas de ciertos verbos deponentes y corrigen —por hipercultismo— el original, empleando, como deponentes verbos que nunca lo fueron, contaminan y confunden, por la misma causa, determinadas grafías v. gr. t>c, t>d, d>t, ch>c, ph>f, th>t, y>i, ae>e, oe>e, etc. o emplean las partículas disyuntivas: *aut*, *vel*, *seu*, *sive* (por debilitamiento de significación) con valor copulativo.

Las observaciones señaladas, ofrecen al diplo-

mista resultados orientadores para establecer cierta gradación entre ambos textos y atribuir mayor antigüedad y la categoría de original al diploma catedralicio y la de copia posterior al texto inserto en el Reg. Vat.

Pasando ahora al análisis diplomático del documento conservado en el Arch. capitular de Salamanca advertimos que, su protocolo —como ocurre en la mayoría de los docs. pontificios a partir de Gregorio VII (aa. 1073-75)— carece de invocación simbólica y verbal, iniciándose directamente por la «intitulatio» o «subscriptio» con el nombre del titular: *Innocentius*, que en este caso es el Obispo de Roma, autor formal del documento o mejor del proceso documental.

Por tratarse de una inserción documentaria en forma extensa («in extenso») la acción jurídica básica —que en nuestro caso es el cuerpo o parte central del documento— la realiza materialmente un mandatario o delegado pontificio («auctor actionis»: Card. Egidius), sin embargo, es el Papa quien da valor, no sólo a la actuación («negotium iuridicum») de quien ejerce el derecho en su nombre, sino también a la acción documentaria, es decir, a este documento incipiente, que por carecer de algunos requisitos legales se halla todavía en la categoría de «acta».

La *acción jurídica* (intervención) y su concreción en normas escritas, llevadas a cabo por el Cardenal Gil Torres, que actúa como legado, deben considerarse como testimonio histórico-jurídico con valor, fundamentalmente, probativo. La nueva fijación por escrito —realizada por expresa voluntad del Papa y en documento propio, conforme a las solemnidades exigidas por la ley— convierte a la «documentatio» en parte esencial de la primitiva acción jurídica (acta presentada por el Card. Gil), que en cierto modo se perfecciona y completa, al añadir a su valor histórico-jurídico y probativo el dispositivo, transformando su carácter de acta privada o semipública en documento público de primer grado, revestido de las solemnidades peculiares de

las cartas o letras pontificias semisolemnes («litterae de iustitia»).

Al nombre del titular se añade la fórmula de devoción y reconocimiento: «servus servorum Dei», atribuida a San Gregorio Magno y generalizada en la diplomática pontificia a partir del s. ix.

Forma parte de la primera línea protocolaria la «*inscriptio*» o dirección con expresión explícita de los destinatarios: el *Obispo*, el *Deán* y el *Cabildo* catedral de Salamanca.

Cierra el protocolo inicial el saludo pontificio («*salutatio*») con la fórmula: «*Salutem et apostolicam benedictionem*», propia de las cartas apostólicas y de los documentos de cierta solemnidad en los que se excluye el concepto de perpetuidad.

Con relación a la «dirección» o destinatario del diploma —que, en nuestro caso es múltiple por dirigirse a varias autoridades: Obispo, Deán y Cabildo de Salamanca— es preciso advertir que en el citado documento se omiten los nombres personales del Obispo y Deán, autoridades máximas de la iglesia matriz y del cuerpo e institución que la representa y rige: el Cabildo.

La Cancillería pontificia —consciente de la importancia de la constitución y normas de gobierno que se insertan en este diploma y, sobre todo, de que tales medidas van encaminadas al restablecimiento de la justicia, de la paz y del bienestar espiritual y temporal del clero y pueblo fiel de Salamanca— quiere significar, tanto a las personas representativas de la autoridad y primeros ejecutores de estas disposiciones, como a sus respectivos intérpretes, que si bien esta carta apostólica va dirigida a la autoridades legítimas, no es por razón de sus personas sino en virtud del cargo y dignidad que ostentan. De ahí que en el pergamino e igualmente en el Reg. Vat. se resaltan gráficamente con mayúscula inicial los cargos o títulos de Obispo, Deán y Cabildo, mientras se silencia visiblemente con dos puntos suspensivos —no por negligencia o ignorancia de la Curia— los nombres de Don Martín y Don Domingo Martín, a la sazón Obispo y Deán, respectivamente, de la diócesis de Salamanca.

El «*texto*» —parte central del mensaje o contenido documental— va precedido de un preámbulo o «exordio», en donde se exponen las razones de orden pastoral y jurídico-administrativas que justifican la intervención pontificia en asunto tan delicado cual es el restablecimiento de la justicia y del orden, resquebrajados, principalmente, por la distribución injusta de los beneficios y rentas eclesiásticas, por el incumplimiento del deber de numerosos clérigos y por su poca solicitud en servicio del culto divino.

«El deber pastoral —dice el Papa— nos invita y la conciencia nos fuerza y exige atender, con la máxima solicitud posible, la utilidad de las iglesias, a fin de que se mantenga en ellas el orden debido».

A este «exordio» —y sin que se interponga la clásica fórmula notificativa, precedida de las partículas: «Itaque...», «Quapropter», «Idcirco...», «Igitur...», o de las expresiones: «Notum sit...»; «Noveritis...»; «Cognoscant...», etc.—, se une la «*narratio*», amplia exposición de motivos y circunstancias en que se explica el porqué de esta acción jurídica, encomendada al Cardenal Gil Torres, cuya normatividad textual (acta constitucional) va encaminada a cortar de raíz los abusos y desórdenes que se consignan a lo largo del escrito.

«Habiendo llegado a nuestros oídos —escribe Inocencio IV— que a consecuencia de la situación desordenada que en distintos aspectos se observa en vuestra iglesia (catedral y diócesis de Salamanca), especialmente, en la consecución de beneficios... Nos, deseando extirpar radicalmente estos desórdenes y no pudiendo atender a todo por nosotros solos, decidimos confiar esta tarea al Cardenal diácono Gil, del título de San Cosme y San Damián, quien tras detenido examen, ha recogido y reformado cuánto necesitaba corrección y reforma, redactando con gran solicitud estos estatutos».

El término de la intervención («*actio*») del delegado pontificio se concreta y manifiesta a través de la constitución escrita («*documentatio*», inacabada en sentido jurídico-diplomático y con carácter de acta) que el propio Cardenal presenta a

su legítimo mandatario para la aprobación oficial y, en consecuencia, para la elevación de un acta o escrito predocumental al rango de documento público con los efectos legales pertinentes:

Tras el estudio de los estatutos, reformas y correcciones propuestas por el Cardenal Gil, el Papa decide una nueva intervención de tipo jurídico-documental (legal y diplomática) y a través de la Cancillería —órgano oficial para la expedición y validación de la documentación pública de los distintos dicasterios curiales— el nuevo diploma, con carácter de «*littera pontificia*», viene a ratificar y confirmar (mediante la aprobación oficial) tanto la constitución inserta como el documento que la contiene.

Conviene advertir que la inserción «*in extenso*» de una constitución y ordenamiento, que descansa sobre un principio de derecho público y, por consiguiente, capaz de producir determinadas consecuencias jurídicas, suponía la aprobación oficial, previo reconocimiento y testimonio de conformidad («*recognitio*») por parte del Papa y de la Cancillería. Por eso aunque en determinadas cancillerías señoriales y episcopales, desde finales del s. XII se va renunciando a algunas solemnidades prescritas en la tramitación documental de la «*conscriptio*», en la Cancillería pontificia —continuando una vieja tradición— sigue estando en vigor la «*recognitio*» explícita, sin que ésta quede reducida a sólo la lectura. De ahí que inmediatamente antes de la inserción del texto —tras el reconocimiento y comprobación de la constitución— se explicita, mediante fórmula corroborativa, la confirmación y ratificación del Pontífice con estas palabras:

«Por ello, al objeto de que esta acción, que surgió de la madurez reflexiva y de la meditación previsoras, no se aparte de la memoria y llegue consignada por escrito a las generaciones futuras..., una vez vistas por Nos las cuestiones (correcciones, reformas y estatutos) que el Card. Gil expone en su escrito, teniéndolas por gratas y ratificándolas, las confirmamos con nuestra autoridad apostólica y las apoyamos con la fuerza del presente documento,

cuyo texto —por precaución y palabra por palabra— hemos creído conveniente insertarlo en la presente (carta), y es como sigue...».

En realidad, no se trata aquí de una simple confirmación o convalidación al estilo de las practica-das desde antiguo por las Cancillerías reales o por el cuerpo notarial, cuyo objetivo principal era pro-longar la validez del documento que se insertaba y, al mismo tiempo, asegurar a sus poseedores el disfrute de los privilegios en él contenidos.

Esta forma clásica de confirmación y convalida-ción, empleada principalmente en los docs. reales hispanos, difiere bastante —al menos desde el pun-to de vista jurídico y diplomático— de la confirma-ción o validación (si así se puede llamar) que nos ofrece el diploma que estudiamos²². No se trata aquí de convalidación notarial, equivalente a una especie de sometimiento del escrito o interven-ción escrita del Cardenal delegado al control de la «fides pública» notarial, sino más bien de la apro-bación oficial por parte del Papa y de la oficina pública (Cancillería) encargada de expedir las actas de gobierno y, tras la revisión y configuración definitiva (original), consignarlas (texto) en el re-gistro oficial.

Por otra parte, el PP. Inocencio IV, al hacer suya la constitución y normas elaboradas por su delegado no revalida ni prolonga la acción jurí-dica contenida en documento emanado por alguno de sus legítimos predecesores en el solio pontificio. Tampoco los destinatarios: Obispo, Deán y Cabil-do, consiguen prolongar el disfrute de sus privile-gios o la transformación de éstos. Se trata más bien de crear una norma legal para corregir y rec-tificar —mediante una adecuada inserción jurídica y documental de primer orden— la situación anó-

mala de una iglesia local sometida jurídicamente en asuntos graves, al control directo del Papa.

La actuación del Card. Gil Torres («actio») y su constitución escrita («conscriptio») con un valor jurídico-documental, más o menos restringido y mo-desto, en conformidad con la amplitud de su delega-ción, recibe ahora —tras la acción pontificia— un nuevo respaldo.

Las normas plasmadas en la constitución carden-alicia, fechada en Lyon el 22 de abril de 1245, hasta el momento de su ratificación e inserción oficial en documento público (Lyon 7 de mayo de 1245) no pasaban de ordenanzas particulares o, a lo menos, semipúblicas. A partir de su expedición en nuevo documento papal tales disposiciones alcanzan el rango de normas pontificias de carácter oficial y el texto del acta (doc. cardenalicio) presen-tado para su aprobación, en virtud de esta inserción oficial en doc. público se transforma en título in-cuestionable y vinculante desde el punto de vista jurídico y diplomático.

El «texto» propiamente dicho, es la constitución íntegra del Cardenal Gil Torres, que aun antes de insertarse en este doc. pontificio ya gozaba de la categoría de testimonio escrito o acta documental, —si se quiere de segundo grado—, pero con posi-bilidad de alcanzar plenitud legal y documental, una vez cumplidos los requisitos y formalidades establecidos por el derecho.

La constitución —núcleo central del texto cardenalicio al que ya nos hemos referido anteriormen-te— consta de dos partes bien definidas. Una *expo-sitiva*, con la enumeración detallada de los desórde-nes y causas que motivaron el estado caótico que se describe y, otra *dispositiva*, en la que se inserta el articulado o conjunto de normas, con fuerza de

22. T. MARÍN MARTÍNEZ, *Confirmación real en docu-mentos castellano-leoneses*, «Estudios dedicados a Menéndez Pidal» III (Madrid 1951) 584-593; L. SÁNCHEZ BELDA, *Notas de diplomática. La confirmación de documentos por los reyes del occidente español*, «Rev. de Arch. Bibl. y

Mus.» (Cuarta época, año VII), t. 59 (1953) 85-116; F. ARRIBAS ARRANZ, *La confirmación de documentos reales a partir de 1562*, «Rev. de Arch. Bibl. y Mus.» t. 59 (1953) 39-49; M.^a Soterraña MARTÍN POSTIGO, *La cancellería cas-tellana de los Reyes Católicos*, Valladolid 1959, pp. 65-85.

ley, por las que en lo sucesivo deberá regirse el Obispo y clero salmantino.

Completa el texto, en su doble faceta: «expositiva y dispositiva, la «*conminatoria*» con dos cláusulas finales, una de tipo preceptivo o «*decretum*» «Nulli ergo..., y otra conminativa o «*sanctio*»: «Si quis autem..., en las que se dictan penas espirituales para los oponentes, incumplidores y transgresores de este documento confirmatorio.

El «protocolo final» o «escatocolo» está integrado por la *datación* (fecha) con el mismo sistema del doc. cardenalicio, omitiendo el «*annus Domini*» y la «*validación*» confirmatoria, mediante la aposición del sello del plomo, pendiente de hilos de algodón trenzados, de color rojo y amarillo. La aposición del sello sin corroboración propiamente dicha y sin suscripciones del otorgante ni de los oficiales de la Cancillería y las anotaciones dorsales, en estos documentos confirmatorios tienen, a la vez, carácter validativo (en el área legal) y autenticativo (en el sentido diplomático-notarial) e indican que este instrumento jurídico se confeccionó directamente sobre el original o minuta y que por voluntad expresa del Papa se revistió de la debida solemnidad cancelleresca y, en su día (simultánea o posteriormente) debería registrarse en los libros oficiales de la Cancillería.

El *acta cardinalicia* que se inserta y valida (que es el texto del doc. pontificio) comienza —en su protocolo inicial— por la «*dirección*» que es idéntica a la del diploma pontificio. Sigue después la «*suscripción*» o «*intitulatio*» con la fórmula de devoción propia de los cardenales: «Egidio (Gil), por disposición divina, Cardenal diácono de San Cosme y San Damián» ... y concluye con el *saludo*: «Salutem», seguido de la expresión piadosa: «in salutis auctorem», equivalente a: «Salud en Cristo, autor de la salvación».

Una vez justificados en el «exordio» los motivos de esta ordenanza —cuya legitimidad se apoya en la doctrina paulina y en la obligación inalienable que pesa sobre la Santa Sede de preocuparse y

velar por el bien de todas las iglesias— el Card. Gil Torres entra directamente en la «*exposición*» detallada de circunstancias, hechos y causas que motivaron el lamentable estado de la iglesia salmantina en aspectos de capital importancia para el desarrollo normal de la vida religiosa y convivencia pacífica del clero y pueblo cristiano.

Tras la enumeración de las causas de esta situación anormal y la exposición de la normatividad dispositiva por la que se regirá en lo sucesivo la diócesis de Salamanca, se estimula en la «*sanctio*» la cláusula preceptiva con la que, a modo de decreto, trata de garantizarse el cumplimiento de lo preceptuado en la «*dispositio*» preceptiva o mandato. El «*escatocolo*» se inicia con la «*data*» tópica, cuyo original: «Datum Lugduni»..., hace referencia, más al tiempo de la fijación documentaria («*conscriptio*») que al tiempo de la «acción jurídica». Sigue la *datación* cronológica, ateniéndose al calendario romano en cuanto al día y mes y un sistema doble para el año: el cómputo o estilo de la «*natividad del Señor*» (*annus Domini*) —que se omite en la *datación* del doc. papal— y el «año del pontificado» («*annus pontificatus*»).

Por lo que se refiere al texto consignado en el Registrado Vaticano hay que advertir que el «*protocolo*» se reduce a la simple dirección, escrita en línea aparte y caracteres rojos («*rubricae*») en esta forma: «Decano et Capitulo Salamantinis». Se omite a uno de los destinatarios principales: el Obispo, resaltando, en cambio, la personalidad de los otros dos: el Deán y Cabildo.

Al «*texto*» o parte central («*contextus*») que se inserta en su integridad precede la «*narratio*» o exposición de motivos y se completa con el «*escatocolo*», sin las suscripciones del Papa ni de los cardenales. Mientras en el diploma conservado en Salamanca se mantiene el sistema normal de abreviaturas, el texto vaticano utiliza, para las fórmulas jurídicas y tratamientos más usuales, un sistema mixto de abreviación y sigla v. gr. di. fi. n. E. = («*dilecto Filio nostro Egidio; «aucte ap^{ca} con. pre. f. pa^ot. con. = «auctoritate apostólica*

confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus».

Finalmente, las cláusulas conminatorias de la «sanctio» no se desarrollan, quedando reducidas a las palabras iniciales seguidas del «et caetera...» en esta forma: «Nulli ergo etc. (decreto), «Si quis autem etc» (sanctio)» seguidas directamente de la datación en la que también se omiten las palabras «pontificatus nostri».

TRANSCRIPCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE INOCENCIO IV.

1/ Innocentius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri.. Episcopo et dilectis filiis.. Decano et Capitulo salamantinis salutem et apostolicam benedictionem.

Pastoralis officii debitum nos invitat et ipse rationis ordo deposcit ut ea sollicitudine utilitatibus ecclesiarum intendere debeamus, quod ipsis ecclesiis ordo debitus conser²vetur et clerici earum ministerio deputati, sicut ab eis stipendia milicie clericalis accipiunt, ita eis obsequia eiusdem militie reverenter impendant. Sane cum nostris foret auribus intimatum, quod de inordinato statu qui super diversis articulis in vestra ecclesia servabatur, presertim in assecutione beneficiorum indigenis advenas prefe³rendo, frequenter materia scandali, rancoris et odii pullulabat, Nos cupientes ipsam radicitus extirpare, ne de cetero decisa repullet et suscitetur sopita ac non valentes intendere ad omnia per nos ipsos, dilecto filio nostro E[gidio] Sanctorum Cosme et Damiani diacono Cardinali hanc sollicitudinem duximus committendam. Ipse vero, lima discre⁴tionis adhibita, corrigenda correxit, reformanda formavit ac cum diligenti sollicitudine salutaria quedam adiecit statuta, per que tam in temporalibus quam in spiritualibus ecclesie vestre status refflorere poterit, ac in ipsius corpore omnia in vinculo pacis et

unionis caritatis deinceps concedente domino tractabuntur. Unde ne factum, quod de consilii⁵maturitate ac provida consideratione processit, in posterum veluti oblivionis obvolutum caligine a memoria relabatur, set²³ scripture suffragio ad futuros presentia pertrahantur correctiones reformationes et statuta, que ab eodem Cardinali facta sunt, maxime ne in obtinendis beneficiis, notis inde oriundis preferantur extranei, nisi utilitate ac necessitate⁶ ecclesie vestre pensatis, morum et scientie prerogativa suffragetur eisdem sicut in ipsius litteris super hec²⁴ factis perperximus contineri, grata et rata habentes auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communicamus, quarum tenorem ad cautelam, de verbo ad verbum, presentibus duximus inserendum, qui talis est:

Venerabili in⁷Christo patri et amico carissimo.., Dei gratia Episcopo et dilectis in Deo.., Decano et Capitulo salamantis, Egidius divina patientia sanctorum Cosme et Damiani diaconus Cardinalis in salutis auctore salutem.

Cum dicat Apostolus: «providemus bona non tantum coram Deo, set etiam coram omnibus hominibus» et iuxta verbum eiusdem: «apostolice sedis instantia cotidiana sit omnium⁸ ecclesiarum sollicitudo continua», domino Pape placuit aliquid cure ac sollicitudinis nobis committere super quibusdam articulis seu capitulis, que in Salamantina ecclesia apostolice correctionis ac reformationis limam ad aliquid exposcere videbantur, que fuerant ad ipsius aures perlata.

Inter illa vero, que potius corrigenda videri poterant et utilius reformanda, intelleximus quod in dicta ecclesia materia⁹scandalorum, invidie fomes et odii, simultatum discordia, detractionis et oblocutionis acerbitas, subditorum quoque adversus Episcopum non levis murmurandi occasio et eorum qui circa ministerium altaris ac divinum officium in horis canonicis frequentiores et magis assidui ser-

23. Reg. Vat. «sed».

24. Reg. Vat. «hoc».

vitores esse debebant, vilis causatio «ad excusandas excusationes in peccatis negligentie» pro defectu/¹⁰ paupertatis et intolerabilis penurie in necessariis usibus procedebant, ex eo quod maioribus plus abundantibus et minoribus plus indigentibus de prestimoniis eiusdem ecclesie, que filiis ipsius conferri consueverant vel indebita retentio vel nimium inequalis distributio procedebat, ut merito illud apostolicum posset inferri: «Quidam ebrii sunt, quidam esuriunt et mendicant». Unde non/¹¹levis infamia et contemptus gravis tam adversus Episcopum quam clerum in populo consurgebant, ut ex hoc etiam celebris sepultura maiorum, de quorum ultimis voluntatibus Salamantina ecclesia consueverat in temporalibus grata suscipere incrementa, penitus abdicaretur ab ea, et filii nobilium seu potentum ac civium aliorum, qui laudabiliter a pueritie primariis rudimentis tam litteris quam moribus in eiusdem/¹²ecclesie sinu maternis uberibus alebantur, cogentur ad habitum laicum retransire desperando de beneficiis matris sue, que ipsis penitus derelictis extraneos et incognitos prefererebat vel forsitan id agebat, ut contra canonum sanctiones, imperiti magistris, novi antiquis, rudes emeritis viris, ordine perturbato, sine respectu modestie prefererentur²⁵.

Unde non inmerito secundum infirmitatem mundanam adversus/¹³eandem ecclesiam odiorum occasio satis odibilis conflabat.

Supradictis ergo malis, quantum desuper in posterum donatum fuerit, vel in totum vel pro parte salubriter extirpandis, illud prius remedium opportunum occurrit, ut in beneficiis eiusdem ecclesie secundum ordinem dispensandis ordo ac modus huiusmodi teneantur, ut ad locum vacantium portionum, cum viginti tantum sint numero portionarii, de benemeritis servi/¹⁴toribus chori tam diocesis quam civitatis, secundum sui servitii meritum et temporis antecessum portionarii assumantur, nec in

hoc extranei preferantur eisdem, dum ibidem idonei poterint reperiri. Similiter cum vacaverint canonie, que tantum viginti sex sunt numero, de portionariis fiant canonici, servata cuiuslibet inter assumendos meritorum et temporis prerogativa, nec aliunde ad canonicas advocentur, dum in ipsa ecclesia/¹⁵possint idonei reperiri. Dignitatibus quoque seu personatibus, cum vacaverint, que per Episcopum et Capitulum communiter conferuntur, sicut sunt decanatus, cantoria, thesauraria, magisterium scholarum, de canonicis primo gradu si reperiri possit idoneus, consulatur; alioquin de portionariis, cui nichil obviet de canonicis institutis. Ad archidiaconatus quoque, qui quatuor sunt, quorum collatio Episcopum solum de consuetudine pertinet, de cano/¹⁶nics seu portionariis eiusdem ecclesie Episcopus secundum ordinem proximo pretaxatum assumat archidiaconatui preficiendum, qui tan Lateranensis quam generalis concilii congruat institutis nec ad aliquam de dignitatibus seu personatibus ante dictis extraneus assumatur, quamdiu in ipsa ecclesia, civitate seu²⁶ diocesi idoneus potuerit inveniri, nisi pensatis ecclesie utilitate et necessitate propter litteralis scientie eminentiam et morum prerogativam aliunde alii/¹⁷assumantur. Hiis ergo circa collationem portionum, canonicatum, dignitatum seu²⁷ personatum secundum equitatis canonicæ modum et ordinem taliter ordinatis, si quid contra presumptum fuerit, ipso iure sit irritum et inane et, cum Episcopus et Capitulum deliquerint, conferendi potestas ad superiorem proximum devolvatur, qui, salvo Sedis Apostolice beneplacito seu mandato, in conferendis predictis beneficiis seu ministeriis prefatum ordinem diligenter/¹⁸ observet, quem si non servaverit, eius collatio in ecclesia Salamantina ipso iure sit irrita penitus et inanis.

Si vero Episcopus Salamantinus deliquerit in predictis, ea vice conferendi potestas ad Salamantinum Capitulum devolvatur, quod similiter infra

25. Deg. Vat. «preferentur».

26. Reg. Vat. «vel».

27. Reg. Vat. «vel».

semestre spatium in conferendo beneficio, quod fuerit conferendum, exequatur officium suum modo et ordine supradictis. Alioquin, quod contra fecerit, sit irritum et inane/¹⁹et superior, cui de iure competit id, sicut predictum est, ordinabiliter exequatur. Quia vero Salamantinus Episcopus qui pro tempore fuerit, sicut providus pastor et prospector optimus necessitatibus et indigentibus filiorum oportuno subsidio sublevandis pia sollicitudine providere tenetur, cum gloria sit Episcopi pauperum inopiis providere et ignominia²⁸ sacerdotis propriis studere divitiis, irrefragabiliter statuimus et inviolabiliter ordi/²⁰namus, ut in conferendis prestimoniis vacantibus seu vacaturis, que personis seu canonicis aut portionariis vel aliis ecclesie servitoribus vel aliquibus extra ecclesiam consueverunt conferri, tanquam fidelis et diligens dispensator, hunc modum teneat et mensuram:

Quilibet portionarius per provisionem Episcopi, preter cotidianam portionem et solitas distributiones habeat in prestimoniis quadraginta morabitanos. Canonicus/²¹ quoque preter vestiarium et portionem et solitas distributiones habeat in prestimoniis octoginta. Decanatu, quia Decanus nobilius membrum Capituli esse dinoscitur, preter canoniam, portiones et solitas distributiones, trecenti quinquaginta morabitanini in prestimoniis assignentur, ita quod in hac estimatione computentur redditus sive prestimonia, que nunc Decanatu sunt anexa. Cantorie²⁹ cum ad cantoris officium/²²ordinatio chori spectet, preter portiones et cotidianas distributiones et canoniam, ducenti quinquaginta morabitanini in prestimoniis assignentur. Thesaurarie, preter canoniam et portiones et cotidianas distributiones centum quinquaginta morabitanini in prestimoniis assignentur. Magisterio scholarum³⁰ preter canoniam, portiones et cotidianas distributiones centum quinquaginta morabitanini in prestimoniis assignentur/²³. Cuilibet archidiaconatu preter canoniam, portiones

et cotidianas distributiones trecenti morabitanini in prestimoniis assignentur. In hac estimatione computentur prestimonia, que nunc habent tam portionarii quam canonici et in personatibus vel in dignitatibus constituti. De archidiaconatu Salamantino, qui ceteris plus habundat, cui nichil in prestimoniis nunc addendum decernimus, taliter providemus/²⁴ ut, cum vacaverit, pars illa archidiaconatus ipsius que vulgariter dicitur *ultra rivum* cum Monte Leon [MONLEON] et Miranda et suis terminis archidiaconatu de Ledesma per Episcopum perpetuo applicetur.

Ista taxatio prestimonia fideliter ab Episcopo fiat, ita quod reddecimis in posterum cessaturis quilibet portionarius et canonicus sive in dignitatis seu personatus ministerio constitutus integram habeat et sine onere taxationem/²⁵prestimonia superius assignatam. De prestimoniis autem, que superfuerint, Episcopo libera sit facultas supra id quod taxatum est, quantum sibi videbitur, pensatis meritis singulorum amplius de gratia conferendi, eo tamen adhibito moderamine, ne propter gratiam uni factam alii scrupuloso corde debeant merito³¹ commoveri.

Ut autem Episcopus tam fame quam honori suo in conferendis beneficiis seu dignitatibus, que ad eius collationem pertinent,/²⁶decenter consulat, ne sinistra suspicio contra factum eius oriri valeat. Si, quod absit, collatio clandestina reputetur et per hoc regulariter improbanda, necessarium iudicamus et modis omnibus observandum ut, cum beneficium seu dignitas ab eo fuerit conferenda, sub testimonio duorum vel trium de collegio ecclesie Salamantine, qui sint merito fide digni, conferat quod fuerit conferendum et ne quod agitur videatur clan/²⁷destinum seu furtivum, eius collatio vel per ipsum vel per nuntium seu per litteram Capitulo publice. In personatibus et aliis beneficiis, que per Episcopum et Capitulum sunt communiter conferenda,

28. Por razón del verbo que rige dativo debería decir: «ignominie».

29. Reg. Vat. add. «vero».

30. Reg. Vat. «Magistroscolarum».

31. Reg. Vat. om. «merito».

ne quisquam³², qui vocandus fuerit, contempnatur et per hoc collatio sit secundum iuris regulam irritanda, illi, quorum est interesse, ubicumque vel in civitate vel in diocesi fuerint, ad diem qui competens videatur super hoc assignandum, canonicè/²⁸ convocentur, ne si absentia captata fuerit vocandorum, fraus et dolus collationem huiusmodi decolorent et cum nota conferentium per superiorem proximum irritetur sic perperam attemptata.

Cum igitur cuilibet in suo gradu portionario, canonico, personatui, dignitati per provisionem superius designatam congrue sit provisum, ita ut nullus causari valeat paupertatis defectum, sub obstestatione divini iudicii/²⁹ quemlibet contestamur et districte precipimus, ut circa cotidianum altaris ministerium et tam chori quam ecclesie in divinis officiis horis canonicis celebrandis obsequium quilibet in suo gradu ita sit sedulus, diligens et attentus, ut de negligencia seu desidia non possit merito denotari. Unde statuimus ut cantor vel ipsius vicarius diebus singulis ordinent matriculam, quis responsorium cantare, quis lectionem/³⁰ legere et aliud officium nocturnum seu diurnum exequi teneatur, singulis quoque septimanis quis missam cantare, quam in hora tertia singulis diebus sine intermissione celebrandam decernimus, quis evangelium, quis epistolam legere debeat, servato more solito in anniversariis defunctorum et matricula cotidie in Capitulo recitetur ita ut, si quis iniuncto sibi ministerio defuerit, illa die pena sibi ex/³¹consuetudine seu constitutione ecclesie imposita infligatur, nec aliquatenus remittatur preter quam si infirmitatis minutionis seu alterius necessarie occupationis de licentia Episcopi, Decani seu Capituli impedimento cogatur abesse et tunc secundum morem ecclesie dare pro se vicarium teneatur. Si quis autem tante temeritatis extiterit, ut ad occupandum violenter quod ei in penam de proventu communi fuerit interdictum, te/³²merariam manum extendat, licet pro huiusmodi ausu graviter merito sit plectendus, ut

tamen pena ad aliquid mitigetur, sex mensibus cotidiane portionis beneficio careat, et nichilominus ecclesie cotidianum servicium impendere teneatur. Quod si contumaciter recusaverit, per Episcopum et Capitulum portionis beneficio perpetuo spoliatur. Sicut autem penam huic temerario inflingendam nolumus relaxari, sic districte pre/³³cipimus, ne Decanus vel eius vicarius sine manifesta et rationabili causa quemquam de Capitulo distributionis cotidiane beneficio privare presumat, quod si presumpserit, iniuriam passo ad interesse quadrupli per Episcopum condempnetur.

Si Decanus in hiis, que ad officium Decani pertinent negligens fuerit et remissus, Episcopi providentia corrigatur. Cantor quoque, Thesaurarius, Magister scholarum, si circa officium suum de hiis ad que tenentur aliquid negli/³⁴genter omiserint, per Decanum et Capitulum, ut moris est, emendentur. Archidiaconorum excessus per Episcopum corrigantur, si quando visitant archidiaconatus culpabiles inventi fuerint vel remissi. Quibus penitus interdiximus, ne in procuratoribus exigendis evectio modum in Lateranense concilio diffinitum excedant, ne procuraciones exigant sive recipiant, nisi cum personaliter visitaverint; si contra fecerint, penam subeant statutam in concilio generali, quam/³⁵ non liceat Episcopo relaxare nec quemquam eorum relevet relaxatio malefacta.

Quia vero Vallis de Opera [VALDOBLA] in spiritualibus ad Capitulum pertinet pleno iure, volumus et mandamus ut per Decanum et Capitulum, sicut moris est, ad visitandum due persone idonee fideles pariter et prudentes annis³³ singulis deputentur, que corrigant et reforment in predicta valle, que corrigenda viderint et utiliter reformanda, referentes ad Capitulum si qua emergerint graviora./³⁶

Ad hec, ne Salamantina ecclesia debito fraude tur ministerio servitorum, cum ipsius bona deriventur ad plurimos, qui vel raro vel numquam eius

32. Reg. Vat. «quisquam».

33. Reg. Vat. «annus».

obsequiis occupantur, et indignum sit ut qui altario non serviunt luxurentur ex ipso, necessarium esse perspeximus huic morbo competenti remedio contraire. Decernimus ergo, quod tam in dignitatibus et personatibus constituti quam canonici seu portionarii in ecclesia Salamantina residentiam faciant continuam, nisi vel in scolis vel in pere/³⁷grinatione vel pro negotiis suis, que sine evidenti dispendi pretermitti non possunt, vel ipsius ecclesie manifestis urgentibus necessitas eos compellat abesse, presertim pro huiusmodi ad sedem apostolicam³⁴ veniendo, licentia propter hoc ab Episcopo vel Capitulo iuxta morem ecclesie petita pariter et obtenta, quam in dictis casibus nolumus, quia non convenit, denegari.

Circa scolares tamen tam in numero quam in tempore studere volentium taliter moderamur, ut Episcopi aut Capituli/³⁸ iudicio decernatur quot et qui magis idonei et ecclesie plus utiles videantur, ut ad studium ab ecclesie servitio relaxentur, et qui ad hoc fuerint relaxandi, quinquennio tantum continuo in scolari militia demorentur, ex tunc ad ecclesiam reversuri, nisi tam Episcopo quam Capitulo placuerit sibi facere gratiam temporis amplioris. Qui vero, sicut iam dictum est, cessantibus casibus ante dictis, noluerint residere, prestimoniorum proventus illius anni, que habent ab ecclesia, applicentur/³⁹ aliis, per quos ecclesie medio tempore serviat; et si nec sic respuerint, tertio legitime requisiti, in totum eis prestimonis cum vestiario subtrahantur. Per hoc tamen non intendimus Episcopo vel Capitulo legem imponere, quin certis personis absentibus ex causa necessaria vel honesta possint remittere, quamdiu sibi videbitur, necessitatem pro tempore residendi.

Ad reprimendam Archipresbiterorum insolentiam superest aliquid adiungendum, de qua/⁴⁰ gravis et multiplex pestilentia in perniciem animarum exoritur; ex eo maxime, quod ab eis pro cleri-

cis ordinandis presumptione temeraria plerumque littere commendatitie ad extraneos Episcopos conceduntur, per quas sine licentia Salamantini Episcopi vel eius Vicarii seu Decani et Capituli, cum ecclesiam vacare contingit, clerici a non suis Episcopis ordinantur. Item cause matrimoniales coram eis tractantur perperam contra canonicas sanctiones, maxime cum peritiam iuris non/⁴¹ habeant, que requiritur in causis matrimonialibus decidendis. Temeritate quoque propria parrochiales ecclesias vacantes conferunt et plerumque commendant, nec non in eisdem assignant pro suo libito portiones sine licentia Episcopi vel Archidiaconi. Presentant etiam Episcopo clericos ordinandos, inconsultis Archidiaconis, quibus subsunt; usurpantes sibi per hoc officium Archidiaconorum, ecclesias et clericos talliis et exactionibus indebitis gravant et opprimunt/⁴² supra modum. 'Concubinarios clericos in suis sordibus computrescere permittentes et eorum interitum premio seu gratia dissimulatione dampnabile procurantes, dum excessus talium tolerant, nec ipsi cum possint arguunt nec Episcopo vel Archidiacono denuntiant corrigendos. Unde contra huius pestilentie corruptelam per antidotum necessarium, quantum industria humana sufficit, ita duximus obviandum, ut quicquid deinceps in matrimonialibus causis,/⁴³ in presentationibus clericorum ad ordines, in litteris concedendis ad extraneos Episcopos et in clericis ordinatis per dictas litteras, in conferendis ecclesiis seu etiam commendandis, in portionibus quibuslibet assignandis vel clericis de beneficio ad beneficium transferendis³⁵ absque licentia Episcopi vel Archidiaconorum seu Decani et Capituli, quando sedes vacaverit, per eosdem Archipresbiteros fuerit attemptatum, ipso iure cassum et irritum prorsus³⁶ habeatur, nullo unquam tempore vali/⁴⁴ turum, non obstante contraria consuetudine, que dicenda est potius corruptela. Quicquid etiam de talliis et exactionibus per eosdem exactum fuerit

34. Reg. Vat. «sede apostolica».

35. Reg. Vat. «transferendis».

36. Reg. Vat. «cassum prorsus et irritum».

vel extortum, per diligentiam Episcopi seu Archidiaconorum ecclesie seu persone quam leserint duplicatum restituere compellantur et in hoc nullam eis gratiam permittimus faciendam.

Si quis autem ex eis convictus fuerit a quocumque clerico presertim cuncubinario seu laico simoniace³⁷ quidpiam³⁸ accepisse, sine spe venie/⁴⁵ cum ignominie nota ab archiprestiberatus officio repellatur. In corrigendis excessibus clericorum presertim eorum, qui publice detinent concubinas, quorum exemplum extenditur in contagium laicorum, vilescit clerus, divina officia contempnuntur, clericalis ordo confunditur et turpiter infamatur, non tantum Episcopi set et Archidiaconorum in singulis archidiaconatibus diligentia ita sit vigilans, ut ex tali contagio pereuntium animarum sanguis/⁴⁶ de ipsorum manibus minime requiratur et cum ipsis excessus talium nuntiantur, non negligant³⁹ emendare si distractionem divini iudicii evitare desiderant et ecclesiasticam non eludere disciplinam, quam contra talium negligentiam seu desidiam interminant canonicæ sanctiones, que decernunt in concilio provinciali, quod singulis annis ex precepto concilii generali est in singulis provinciis celebrandum, plectendam districte desidiam prelatorum/⁴⁷.

Cum ergo per Archidiaconos suspensionis vel excommunicationis in aliquem subditorum vel in ecclesias seu loca interdicti sententie rationalibiter in casu licito prolata fuerint, non presumat Episcopus, irrequisitis⁴⁰ Archidiaconis, sine cause cognitione et absque congrua satisfactione relaxare sententias in tales taliter promulgatas, relaxatione tali, si contra hoc attemptata fuerit, minime profutura, quominus a delinquente debita satisfactio/⁴⁸ vel emenda prestatetur.

Preterea statuimus et inviolabiliter observari precipimus, ne aliquis portionarius vel canonicus aut in dignitate seu personatu constitutus portionem

in aliqua ecclesia parochiali civitatis vel diocesis Salamantine de cetero habeat vel retineat iam obtentam, adicientes ut redditus sive proventus portionum, quas in parochialibus ecclesiis civitatis vel diocesis Salamantine vacare contigerit, clericis ecclesiarum/⁴⁹ ipsarum aut, si clericus ibi defuerit, ecclesie utilitati, non autem Episcopo vel Archidiacono seu Archipresbiteris applicentur, salvis iuribus prelatorum et ecclesie cathedralis. Ad hec, ne aliqua parochialis ecclesia civitatis vel diocesis Salamantine divinis obsequiis et consueto servitorum numero defraudetur, stabiliter ordinamus ne Episcopus vel Archidiaconi portionem in eadem ecclesia parochiali vacantem supprimant vel in suos usus con/⁵⁰vertant set⁴¹, cum aliqua portio vacaverit, quantum facultas ecclesie more solito sufficere poterit, persone idonee conferatur. Alioquin, si Episcopus vel Archidiaconus negligens fuerit, per Capitulum vel, si Capitulum neglexerit, per Metropolitanum persone idonee conferatur. Si quid dubium vel obscurum videbitur in premiis, ad examen apostolicum referatur, ut ab eo interpretatio seu declaratio prodeat, apud quem inter equitatem et ius interpretationis interponende/⁵¹ singularis auctoritas residet et potestas.

Supradicta decernimus firmiter et inviolabiliter observanda salvis aliis constitutionibus et consuetudinibus ecclesie Salamantine rationalibus approbatis hactenus et obtentis, per quas tamen nolumus nec intendimus presenti constitutioni et ordinationi in aliquo derogare. Datum Lugduni anno Domini M^oCC^oXLV^o, X^o kalendas maii pontificatus domini Inocentii IIII, anno secundo. Nulli ergo omnino/⁵² hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis⁴² infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem⁴³ hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

37. Reg. Vat. «symoniace».

38. Reg. Vat. «quippiam».

39. Reg. Vat. «negligantur».

40. Reg. Vat. «inrequisitis».

41. Reg. Vat. «sed».

42. Reg. Vat. om. «omnino hominum... contraire».

43. Reg. Vat. om. «autem hoc attemptare... incursurum».

Datum Lugduni nonas maii, pontificatus nostri ⁴⁴ anno secundo.

TRADUCCIÓN.

Inocencio Obispo (de Roma), siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano, el Obispo y a los queridos hijos, el Deán y Cabildo de Salamanca, salud y bendición apostólica.

El deber pastoral nos invita y el orden racional nos exige atender a la utilidad de las iglesias con tal solicitud que se mantenga el orden debido en las mismas, y los clérigos asignados al servicio de ellas, lo mismo que reciben de las iglesias el salario de su trabajo clerical le dediquen respetuosamente las atenciones del mismo ministerio. Habiendo llegado a nuestros oídos que a consecuencia de la situación desordenada que en distintos aspectos se observa en vuestra iglesia, especialmente en la consecución de beneficios, por preferir los extradiocesanos a los nativos (diocesanos), surgía con frecuencia motivo de escándalo, rencor y odio, Nos deseando extirparlo radicalmente —no sea que cortado en los otros aspectos, vuelva a brotar y surja de su adormecimiento— y no pudiendo atender a todo por nosotros solos, decidimos confiar esta tarea al Cardenal diácono, Gil (Egidio), del título de San Cosme y San Damián. El por su parte, aplicando la lima de su inteligencia, ha corregido lo que necesitaba corrección y ha reformado lo que exigía reforma y, con solicitud saludable, ha añadido determinados estatutos mediante los cuales podría florecer nuevamente el estado (la situación) de vuestra iglesia, tanto en lo espiritual como en lo temporal, y en lo sucesivo, todo —con la ayuda de Dios— se llevará a cabo con el vínculo de la paz y en la unión de la caridad.

Por ello, al objeto de que esta decisión (medida), que surgió de la madurez de la reflexión y de

la meditación previsora, no se aparte de la memoria, envuelta en la obscuridad del olvido, sino que —consignadas por escrito— lleguen a las futuras generaciones las presentes correcciones, reformas y estatutos, que fueron hechos por el mismo Cardenal, especialmente, para que no sean preferidos en la consecución de beneficios los forasteros a los conocidos (diocesanos), originarios de ahí, salvo si, sopesadas la utilidad y necesidades de vuestra iglesia, una superioridad en costumbres y ciencia los hace preferibles.

Una vez vistas por Nos las cuestiones que él expone en su carta, teniéndolas por gratas y ratificándolas, las confirmamos con nuestra apostólica autoridad y las apoyamos con la fuerza del presente escrito.

Su texto, por precaución, hemos creído conveniente insertarlo en la presente, palabra por palabra (literalmente), el cual es así:

«Al venerable padre y amigo queridísimo en Cristo, el Obispo de Salamanca por la gracia de Dios, al Deán y al Cabildo salmantinos, amados en el Señor, el Cardenal diácono Gil, del título de S. Cosme y S. Damián por disposición divina, salud en el Señor [Cristo], autor de la salvación.

Puesto que el Apóstol dice: «Nos preocupamos del bien no sólo ante Dios sino ante todos los hombres» (2.^a Cor. 8,21) y puesto que según la palabra del mismo «es cometido constante de la Sede Apostólica la preocupación por todas las iglesias» (2.^a Cor. 11,28), su santidad el Papa decidió confiarnos parte de sus solícitas preocupaciones respecto a ciertos aspectos y cuestiones llegados a sus oídos, que exigían, en la iglesia salmantina, alguna lima de corrección y reforma.

Entre las que pueden parecer más merecedoras de corrección y reforma, hemos comprendido (llegado a la conclusión de) que en dicha iglesia surgen motivos de escándalo, acicate de envidia y de odio, cúmulo de reyertas, duras difamaciones y murmu-

44. Reg. Vat. om. «pontificatus nostri».

raciones, pretextos —no sin peso por parte de los súbditos— para murmurar incluso contra el Obispo y vulgar charlatanería «para disculparse de sus pecados de negligencia», (Psal. 140,4) pretextando su pobreza e intolerable penuria en sus necesidades, los que deberían acudir con más frecuencia al ministerio del altar y al oficio divino en las horas canónicas y prestar sus servicios con mayor asiduidad; ya que teniendo cada vez más los ricos y cada vez menos los pobres, porque se mantenía una retención indebida y un reparto excesivamente injusto de los bienes de la iglesia, que era costumbre distribuir entre sus hijos, de suerte que podría aplicarse con razón el dicho del Apóstol: «Unos están ébrios, otros pasan hambre y tienen que mendigar» (1 Cor. 11,21).

En consecuencia se levantaban en el pueblo no pocas habladurías y graves desprecios tanto contra el Obispo como contra el clero, de suerte que por ello incluso se desatendía (por parte de la iglesia) las preclaras sepulturas de los antepasados de cuya voluntad la iglesia salmantina solía recibir sustanciosas donaciones temporales, y los hijos de los nobles y poderosos y de otros ciudadanos que, desde los primeros años de su niñez, aprendían —tanto las letras como las costumbres— en el seno de la misma iglesia a sus paternos pechos, se veían obligados a volver al estado laical por desesperar de los beneficios de su madre, que dejando a ellos en el total abandono, daba prioridad a los extraños y desconocidos y actuaba de modo que —contra las disposiciones de los cánones— los ignorantes eran preferidos a los maestros, los nuevos a los veteranos, los inexpertos a los hombres beneméritos, perturbando las normas del derecho, sin miramiento a la justa equidad. Así, no sin razón —a causa de las debilidades humanas— se provocaba un motivo vergonzoso de odios contra la misma Iglesia. Para extirpar, pues, saludablemente los antedichos males, en su totalidad o en parte, por lo que se refiere a futuras donaciones, se nos ha ocurrido, en primer lugar, este oportuno remedio: el que en la distribución de los beneficios de la iglesia (salmantina), de

acuerdo con lo dispuesto, se observe el orden y medida, de suerte que para el desempeño de las vacantes (beneficios), como el número de beneficios es de sólo veinte, sean elegidos entre los beneméritos servidores del coro, tanto de la diócesis como de la ciudad, de acuerdo con el mérito de sus servicios y su veteranía y no sean preferidos los extraños (extradiocesanos) a ellos, con tal que puedan hallarse sujetos idóneos para ello. De igual modo, cuando vaquen las canonjías, que sólo son veintiséis, nombrense canónigos de entre los beneficiados, observando la prerrogativa de los méritos y tiempo (de servicio) de cada uno de los candidatos, y no sean traídos para las canonjías de ninguna parte, si pueden hallarse personas idóneas en esa iglesia.

Para las dignidades y canonjías de oficio, que son conferidas por el Obispo y Cabildo, como son el *deanato*, el oficio de *chantre*, de *tesorero* y *maestrescuela*, cuando vaquen, delibérese si puede hallarse alguien idóneo entre los canónigos del primer grado, si no, entre los beneficiados a quien no se oponga ninguna de las instituciones canónicas (normas generales y estatutos del Cabildo). Para los arcedianatos también, que son cuatro y cuya colación corresponde de costumbre sólo al Obispo, elija el Obispo, para hacerse cargo del arcedianato, de entre los canónigos y beneficiados de la misma iglesia, de acuerdo con las normas antes señaladas, a aquél que se acomode a las disposiciones tanto del Concilio lateranense, como del general y no sea nombrado para ninguna de las dignidades o beneficios, antes citados, ningún extraño si puede hallarse persona idónea en esa iglesia, en la ciudad o en la diócesis, salvo si sopesada la utilidad y necesidades de la iglesia se nombran de distintas partes por la eminencia de su ciencia literaria y la ejemplaridad de sus costumbres.

Una vez fijadas estas disposiciones acerca de la colación de los beneficios de las canonjías, de las dignidades y de las canonjías de oficio, según el modo y orden de la equidad canónica, si algo se hiciera en contra quede sin efecto e invalidado según derecho, y cuando el Obispo y el Cabildo

delincan, vuelva la potestad de conferirlas al superior inmediato, que debe guardar diligentemente el orden antedicho en la colación de los citados beneficios, dejando a salvo la voluntad o disposición en contrario de la Sede Apostólica. Si no lo guarda, quede totalmente sin efecto conforme a derecho e invalidada su colación en la iglesia salmantina. Si el Obispo salmantino comete injusticia en lo antedicho, en ese caso pase el derecho de conferir al Cabildo salmantino, el cual debe llevar a efecto su misión de conferir el beneficio que haya de ser conferido, según el modo y orden dichos, en el espacio de seis meses. Si no, lo que hiciere en contra, quede sin efecto e invalidado y el superior a quien corresponda por derecho —según se dijo— lo lleve a efecto conforme a lo prescrito. Sin embargo, como el que circunstancialmente fuere Obispo de Salamanca está obligado —cual pastor vigilante y guardián perfecto— a cuidar de aliviar las necesidades e indigencias de sus hijos con la ayuda oportuna y con piadosa solicitud, ya que es gloria del Obispo atender a las necesidades de los pobres y cuidar con sus propias riquezas de la miseria vergonzante del sacerdote, establecemos tajantemente y ordenamos taxativamente que observe este modo y medida, cual fiel y diligente administrador, en la colación de los cargos vacantes o que vacaren, que fue costumbre conferir a canónigos o beneficiados o a otros servidores de la iglesia o a otros de fuera de ella, [lo siguiente]: Todo beneficiado por la aportación del Obispo, además del beneficio diario y los repartos acostumbrados, reciba como donativo 40 maravedíes; el canónigo además del vestuario y el beneficio y los repartos acostumbrados reciba en donativo 80, al deanato, como el Deán es el miembro más noble del Cabildo, aparte de la canonjía los beneficios y los repartos acostumbrados, le sean asignados en donativos 350 maravedíes, de suerte que en esta estimación se incluyan las rentas y donativos que ahora van anejas al deanato; a la chantría, puesto que al oficio de chantre corresponde la organización del coro, además de los beneficios y repartos diarios y de la canonjía, síanle asignados

como donativos 250 maravedíes. A la tesorería, además de la canonjía y de los beneficios y los repartos diarios síanle asignados como donativos 150 maravedíes. Al maestrescuela, además de la canonjía, los beneficios y los repartos diarios, asígnensele como donativos 150 maravedíes. A todos los arcedianos a parte de la canonjía, los beneficios y los repartos diarios asígnenseles como donativos 300 maravedíes. En esta estimación sean tenidos en cuenta los repartos (donativos) que ahora tienen tanto los beneficiados como los canónigos, lo mismo los canónigos de oficio que los de dignidad. Con relación al arcedianato de Salamanca, que es más rico que los demás, al cual decidimos no añadir nada en calidad de donativo (suplemento), disponemos que cuando vaque (el arcedianato de Salamanca), la parte de ese arcedianato que se llama vulgarmente la «trasribera» (del otro lado del río) con Monleón y Miranda y sus territorios, sea anexionada para siempre por el Obispo al arcedianato de Ledesma. Esta estimación de los donativos (repartos suplementarios) llévela a efecto el Obispo lealmente, de modo que como van a quedar sin percibirse, en lo sucesivo, los *rediezmos*, todos los beneficiados y canónigos tanto de dignidad como de oficio reciban íntegra y sin carga la cantidad antes señalada.

Respecto a lo que sobrare de los donativos, el Obispo tenga libre facultad de conceder gratuitamente —una vez valorados los méritos de cada uno— cuanto tenga a bien, aparte de lo que ha sido establecido, actuando con tal escrupulosidad que por el favor hecho a unos no tengan con razón que sentirse ofendidos otros en su sensibilidad.

El Obispo debe cuidar con esmero de su fama y honor al conferir los beneficios y dignidades, cuya colación le corresponde, para que no pueda originarse una sospecha siniestra contra su acción. Si la colación —cosa que ojalá no suceda— se tuviera por clandestina y por lo mismo reprobable, conforme a la norma, consideramos necesario y obligatorio de todos modos que cuando el beneficio y dignidad hayan de ser otorgados por él, los con-

fiera tras el testimonio de dos o tres del colegio (capitular) de la iglesia salmantina, que sean merecidamente dignos de crédito, y al objeto de que la acción no parezca clandestina y furtiva, su colación hágala pública al Cabildo, bien por él mismo, bien por un mensajero o mediante una carta.

En las canonjías de oficio y en otros beneficios que han de conferir en común el Obispo y el Cabildo, para que nadie que haya de ser nombrado sea despreciado y tenga —por esto— que declararse nula la colación, con arreglo a la norma de derecho, sean convocados canónicamente —para fijar el día que parezca adecuado para esto— aquellos a quienes corresponde estar presentes dondequiera que se encuentren, ya en la ciudad ya en la diócesis, no sea que si se vislumbra (percibe) la ausencia de los que deben ser nombrados, el fraude y el engaño desacrediten una colación de este tipo y esta colación intentada injustamente sea declarada nula por el inmediato superior con nota desfavorable para los que la confieran.

Una vez, pues, que por la disposición antes señalada, se hayan tomado las medidas adecuadas de suerte que ninguno dentro de su categoría: beneficiado, canónico simple, canónico de oficio o dignidad, pueda pretextar situación de pobreza, pedimos a todos y encarecidamente ordenamos, bajo juramento del juicio divino, que sean tan cuidadosos, diligentes y atentos en el ministerio diario del altar y en el deber del coro y de la iglesia durante la celebración de los oficios divinos y horas canónicas, que no pueda achacárseles, con razón, negligencia y desidia.

Así pues, ordenamos que el *Chantre* o el *Vicechantre* fijen cada día la lista ordenada de quién está obligado a cantar el responsorio, quién a leer la lección y a efectuar otro oficio nocturno o diurno. Cada semana (señale) también, quién debe cantar la misa, que ordenamos debe ser celebrada sin excepción a la hora de tercia cada día, quién debe leer el evangelio, quién la epístola, respetando la costumbre mantenida en los aniversarios de difuntos

y que la lista sea leída cada día en el Cabildo de suerte que si alguien falta al ministerio a él asignado, ese día le sea aplicada la pena impuesta por la costumbre o estatuto de la iglesia (catedral) y de ninguna manera se le perdone, salvo si con el permiso del Obispo, del Deán o del Cabildo se ve obligado a faltar por enfermedad, debilidad o por otra ocupación necesaria y en ese caso —según la costumbre de la iglesia— sea obligado a poner un sustituto. Si hubiere alguien, sin embargo, de tal temeridad que tienda su mano osada para ocupar violentamente lo que se le ha prohibido, como castigo —en beneficio de todos— aun cuando por una osadía tamaña merecería ser castigado duramente en el supuesto de que el castigo se suavice en algo, sea privado durante seis meses del beneficio de la ración diaria y, pese a todo, quede obligado a prestar el servicio cotidiano a la iglesia. Si se niega a ello tercamente, sea privado para siempre del beneficio de la ración por el Obispo y el Cabildo.

Del mismo modo que no queremos que se rebaje la pena al osado, así ordenamos taxativamente que ni el Deán ni el Vicedeán se atrevan a privar —sin una causa manifiesta y razonable— del beneficio de la distribución diaria a ninguno del Cabildo y, si lo hiciere, sea condenado por el Obispo a pagar el cuádruplo al que sufrió la injuria. Si el Deán fuere negligente y descuidado en las cosas que corresponden a su deber de deán, corrijalo la vigilancia del Obispo. También el *Chantre*, el *Tesoroero*, el *Maestrescuela* si omitieren por negligencia alguna de las cosas a las que están obligados por su oficio, sean corregidos como es costumbre por el Deán y Cabildo. Los excesos de los *Arcedianos* corrijalos el Obispo, si cuando visita el arcedianato los halla culpables y negligentes. A ellos (los *Arcedianos*) les prohibimos tajantemente que en el cobro de las procuras (administraciones) sobrepasen las medidas de las tasas fijadas para el cobro en el Concilio lateranense, que no exijan ni reciban derechos especiales salvo cuando hagan visita pastoral; si obraran en contra de esto, sufran el castigo esta-

blecido en el Concilio general, castigo que el Obispo no pueda perdonar y un perdón mal concedido no pueda alcanzar a ninguno de ellos.

Como la Valdobra en lo espiritual pertenece de pleno derecho al Cabildo, queremos y ordenamos que por el Deán y el Cabildo, como es costumbre, sean nombradas cada año, para hacer la visita, dos personas idóneas, leales y también prudentes, para que corrijan y reformen en dicho valle (del Huebra) lo que vean que merece corrección y útil reforma, dando cuenta al Cabildo si ha surgido algo grave.

Además, para que la iglesia salmantina no se vea privada del servicio obligado de sus servidores, siendo así que sus bienes vienen injustamente a parar a manos de muchos que, raramente o nunca, se ocupan de su servicio y es indigno, que los que no sirven al altar vivan lujosamente de él, hemos considerado necesario enfrentarnos a este desorden con un remedio adecuado.

Decretamos, pues, que tanto los canónigos de dignidad como los de oficio y los canónigos simples y beneficiados de la iglesia salmantina tengan allí residencia ininterrumpida (habitual), salvo si la necesidad los obliga a estar ausentes, bien en la escuela (enseñanza) o en un viaje (peregrinación) o por razón de sus propios negocios, que no pueden ser abandonados sin evidentes pérdidas, o bien a causa de urgentes y claras necesidades de la iglesia, en especial para venir ante la Sede Apostólica, tras haber pedido y también conseguido licencia para ello del Obispo y del Cabildo, según la costumbre de la iglesia, licencia que no queremos sea denegada —porque no es justo— en los casos antes citados.

Respecto a los escolares que quieran estudiar, ordenamos —tanto por lo que se refiere al número como al tiempo— que se establezca a juicio del Obispo y del Cabildo, cuántos y quiénes parecen que son los más aptos y útiles para la iglesia al objeto de que sean eximidos del servicio de la iglesia para (dedicarse) al estudio y los que queden libres para el estudio vivan ininterrumpidamente durante cinco años en la vida de estudio (escolar)

para volver después a la iglesia, salvo si el Obispo y el Cabildo deciden concederles un tiempo mayor. Los que, sin embargo —como ya antes se dijo— exceptuados los casos antes señalados, no quisieren residir, la suma de las pagas de ese año, que reciben de la iglesia, sea entregada a los otros, por medio de los cuales se sirve a la iglesia durante ese medio tiempo y si ni siquiera así vinieren a razón, amonestados por tercera vez, conforme a la ley, sean privados de las pagas en su totalidad y del vestuario. Con esta medida, sin embargo, no tratamos de imponer al Obispo y al Cabildo la ley de no poder eximir a ciertas personas ausentes por causa necesaria o justa —por el tiempo que crean oportuno— de la obligación de residir temporalmente.

Hay que añadir algo para reprimir la insolencia de los *Arciprestes*, a causa de la cual surge, para perdición de las almas, una plaga grave e innumerable, sobre todo, porque con osadía temeraria ellos, muchas veces, envían cartas comendaticias para la ordenación de clérigos a Obispos extraños, mediante las cuales (cartas) sin licencia del Obispo de Salamanca o de su Vicario o del Deán y Cabildo, son ordenados clérigos por Obispos extradiocesanos, cuando acontece que una iglesia queda vacante. Igualmente las causas matrimoniales se resuelven torpemente en presencia de ellos contra las prescripciones canónicas, sobre todo, porque no tienen el conocimiento del derecho que se requiere en las soluciones (tratamiento) de las causas matrimoniales. También, con la osadía que les es propia, confieren y asignan a menudo las iglesias parroquiales vacantes y en ellas establecen, a su capricho, los repartos proporcionales de ingresos sin permiso del Obispo o del Arcediano. Incluso presentan al Obispo clérigos para ser ordenados sin haber consultado a los Arcedianos, a los que están sometidos; usurpando con ello la jurisdicción de los Arcedianos, gravan y cargan desmesuradamente con impuestos y exacciones a las iglesias y a los clérigos. Permitiendo que los clérigos amancebados se pudran en sus inmundicias y colaborando, con un disimulo condenable, a su muerte (espiritual), ya sea por causa del

dinero o de la influencia, al tolerar sus excesos, ni los acusan cuando pueden, ni los denuncian, para ser corregidos, ante el Obispo o el Arcediano. De ahí que, contra esta corrupción vergonzosa, consideramos necesario salir al paso con un remedio eficaz de acuerdo con el buen sentido, de modo que todo lo que fuere efectuado ilegalmente por esos Arciprestes, en lo sucesivo, por lo que respecta a las causas matrimoniales, en las presentaciones de clérigos para las órdenes, en la presentación de cartas a Obispos extradocesanos y en la ordenación de clérigos por las dichas cartas, en la colación o encargo de iglesias, en la aplicación de ciertos repartos y en el trasiego de clérigos de beneficio en beneficio sin el permiso del Obispo y de los Arcedianos o del Deán y Cabildo, en período de sede vacante, sea considerado jurídicamente como totalmente nulo e inválido (todo lo que hicieren) sin posibilidad de futura validez, pese a la costumbre contraria, que más bien ha de llamarse corrupción. Todo lo que hubiere sido cobrado o extorsionado con exacciones e impuestos por ellos, la diligencia del Obispo y de los Arcedianos debe obligarlos a devolverlo duplicado a la iglesia o a la persona a la que hayan perjudicado y en esto no admitimos que se les conceda ningún perdón. Si alguno de ellos fuere convicto de haber recibido simoniamente algo de algún clérigo, sobre todo (si está) amancebado o laico, sin esperanza de perdón, sea expulsado del cargo de arcediano con pública deshonra.

En la corrección de los desmanes de los clérigos, especialmente de aquellos que públicamente retienen a las concubinas, cuyo ejemplo se extiende contagiando a los laicos, se envilece el clero, se abandonan (desprecian) los oficios divinos y el orden social se turba y desprestigia vergonzosamente, la diligencia no sólo del Obispo sino de los Arcedianos en cada arcedianato sea tan vigilante, que no tenga que reclamárseles la sangre de las almas que perecen a consecuencia de este contagio por su acción (conducta) y cuando se les notifican los excesos de éstos no se descuiden en corregirlos, si desean evi-

tar el castigo del juicio divino y no burlarse de la disciplina eclesiástica, contra la cual negligencia y desidia de los tales (Arcedianos) amenazan las penas canónicas, que decretan que en el concilio provincial —que ha de celebrarse cada año en cada provincia, según lo ordenado en el concilio general— se castigue sin miramientos la desidia de los Obispos. Así pues cuando razonablemente y en casos lícitos hayan sido dadas por los Arcedianos sentencias de suspensión o de excomunión contra alguno de sus súbditos o de entredicho contra las iglesias o lugares, el Obispo no se atreva —sin consultar a los Arcedianos— a rebajar las decisiones así promulgadas contra ellos sin conocimiento de causa y sin la adecuada satisfacción, ya que este perdón si se consigue contra esto (decisión de los Arcedianos), no ha de lograr, en absoluto, que el delincuente preste la debida satisfacción y enmienda.

Además, mandamos y ordenamos que se observe sin excusas, que ningún beneficiado ni canónico de dignidad o de oficio tenga o retenga un segundo beneficio, ya conseguido indebidamente, en alguna iglesia parroquial de la ciudad o de la diócesis de Salamanca, añadiendo que las rentas y frutos de los beneficiados que, por algunas circunstancias, estuvieren vacantes en las iglesias parroquiales de la ciudad y diócesis de Salamanca se entreguen a los clérigos de esas iglesias y si faltaren los clérigos en ellas, que se apliquen al servicio de la iglesia, pero no al Obispo o al Arcediano ni a los Arciprestes, dejando a salvo los derechos de los prelados y los de la iglesia catedral. Además, para que ninguna iglesia parroquial de la ciudad y diócesis de Salamanca se vea privada de los servicios y del número normal de servidores, ordenamos firmemente que ni el Obispo ni los Arcedianos supriman un beneficio vacante en la misma iglesia parroquial (iglesias parroquiales) o lo apliquen en provecho propio, sino que cuando algún beneficio vaque, en la medida en que los recursos de la iglesia puedan ser suficientes —según la costumbre— se confiera a una persona idónea. Por lo demás si el Obispo y el Arcediano fueren negligentes, confiera ese beneficio

a persona idónea el Cabildo, y si el Cabildo se descuidara el Metropolitano. Si en lo que antecede parece algo dudoso u oscuro, preséntese al juicio (examen) de la Santa Sede para que emita una interpretación y dé la razón a aquél que tiene autoridad y poder especiales para interpretar conforme a equidad y derecho.

Lo anteriormente expuesto mandamos que se observe firmemente y sin que se pueda violar, dejando a salvo las otras constituciones y costumbres razonables de la iglesia salmantina aprobadas y conseguidas hasta este momento, por las cuales, sin em-

bargo, no queremos ni admitimos que se derogue en nada la presente constitución y ordenamiento.

Dada en Lyon el año del Señor 1245, el día 22 de abril, en el año segundo del pontificado de Inocencio IV. Ningún hombre, pues, se permita quebrantar este documento de confirmación (refrendo) ni oponerse a él con arrogancia temeraria. Sin embargo, si alguien se atreviera a realizarlo, sepa que incurrirá en la cólera de Dios omnipotente y de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Dada en Lyon, el día 7 de mayo, el año segundo de nuestro pontificado».